

Chile versus Perú y Bolivia: Una Relación Vecinal Conflictiva

Carlos Maldonado Prieto
cmaldona_99@yahoo.com
Santiago de Chile
Marzo 2005

Introducción

Paradójicamente, junto al reconocimiento internacional de sus logros económicos y comerciales, Chile se ha visto confrontado con el vigoroso resurgimiento de reacciones conflictivas por parte de sus vecinos geográficos. Ellas van de la demanda marítima boliviana o las reclamaciones peruanas de diversa índole –que incluyen, por ejemplo, la fijación de un nuevo límite marítimo o la filiación del pisco- hasta un inédito enfriamiento de la relación privilegiada con Argentina por los recortes del suministro de gas natural provenientes de ese país. Como secuela de esta nueva situación vecinal, amplios sectores de la opinión pública chilena han criticado la política exterior del gobierno, apuntando a una ausencia de consideración de las particulares características políticas, económicas y culturales de la región latinoamericana, y especialmente del entorno vecinal.

Esta contradictoria evolución reaviva una antigua pregunta: ¿por qué Chile, el Perú y Bolivia no pueden vivir en armonía, sobre todo habiendo transcurrido tanto tiempo desde el término de la Guerra del Pacífico? Muchos habitantes de estos tres países miran con cierta envidia el ejemplo de los europeos que dejaron atrás la traumática vivencia de dos guerras mundiales y crearon una comunidad económica y política sólida y pujante. Más cerca aún, el caso paradigmático de la normalización de los vínculos chileno-argentinos o la relativa consolidación de MERCOSUR, surgen como demostración de la posibilidad que en nuestra región también puede haber cooperación y desarrollo económico en armonía.

La necesidad geopolítica y económica de un entorno vecinal armonioso para el desarrollo del país justifica el análisis histórico de las relaciones que Chile ha tenido hacia sus vecinos del norte, en especial en el ámbito de seguridad y defensa. Este análisis considera y evalúa las dificultades que enfrentan los tres países, herederos de una historia común compleja. Asimismo, pretende entregar una visión constructiva y lo más alejada de las tradicionales concepciones nacionalistas, que contribuya a cambiar la calidad de las relaciones vecinales, una de las tareas pendientes de la modernización del Estado y de la democratización de la vida social que viene experimentando el país en los últimos años.

I.- Antecedentes Históricos

Hay que considerar que la relación de Chile y sus vecinos del norte ha estado signada por la confrontación, producto principalmente de conflictos armados ocurridos durante el siglo XIX. Tanto la Guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana (1836-39) como la Guerra del Pacífico (1879-83) se produjeron por una rivalidad de tipo económico y comercial.

A diferencia de la primera guerra, en la que Chile se limitó a desarticular la Confederación, en la segunda conflagración fue mucho más allá anexándose vastos territorios de sus contrincantes. Producto de esto, sobrevino una larga y penosa posguerra que prácticamente ha durado hasta nuestros días. Es probable que ésta recién llegue a su fin cuando Bolivia abandone su actual enclaustramiento geográfico y entre Chile y el Perú haya una reconciliación sincera basada en el reconocimiento crítico de los errores y aciertos del pasado común.

Muchos autores peruanos y bolivianos insisten en adjudicarle a Chile un permanente y premeditado afán expansionista, originado en la supuesta falta de recursos para sostener su crecimiento económico. Para uno de ellos, por ejemplo, la anexión del litoral boliviano, sancionada jurídicamente en 1904, "es, en realidad, la última etapa de un proceso que se inicia, por lo menos, 70 años antes", en referencia a la Guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana.¹

Sin embargo, durante el proceso de delimitación territorial de las repúblicas latinoamericanas ocurrido a lo largo del siglo XIX, todos los países se vieron involucrados en guerras vecinales. Prácticamente todas ellas terminaron con anexiones territoriales, sustanciales modificaciones de los límites fronterizos y grandes destrucciones materiales y humanas. El caso más dramático sea quizás la Guerra de la Triple Alianza (1865-70) de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, que diezmó a gran parte de la población masculina de este último. Según estudios recientes, el conflicto cobró la vida de unos 166.000 paraguayos, 50.000 brasileños, 18.000 argentinos y 3.100 uruguayos.² Al parecer, el conflicto continúa siendo fuente de conflicto hasta hoy día. Según informes de prensa, el gobierno brasileño desea mantener en "secreto eterno" los archivos históricos respecto de la Guerra de la Triple Alianza, de modo de ocultar los detalles de la

¹ Javier Murillo de la Rocha, "Bolivia y Chile: Una vecindad fracturada", Luis Maira y Javier Murillo de la Rocha, *El largo conflicto entre Chile y Bolivia. Dos visiones*, Santiago, 2004, p. 105.

² "Brasil: La guerra de la Triple Alianza quedará en secreto", *Clarín*, Buenos Aires, 17/12/2004.

demarcación fraudulenta de las fronteras de Paraguay, pues su divulgación sería “dinamita pura”.³

Chile tampoco fue la excepción. Sus clases dirigentes utilizaron las guerras exteriores como factor de unidad nacional y predominio geopolítico y comercial en la región. En ambas conflagraciones decimonónicas, las autoridades chilenas buscaron alianzas con determinados caudillos peruanos tanto para debilitar la resistencia militar como para firmar acuerdos de paz que permitieran el regreso de las tropas chilenas.

La Guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana

Desde tiempos coloniales existió una velada rivalidad entre Chile y el Perú. Los chilenos siempre se habían quejado de los privilegios peruanos, del monopolio del comercio nacional por las casas limeñas, etc. Pero también había una comunidad de intereses económicos, pues Chile colocaba trigo y harina, fruta seca y maderas en el Perú, y éste vendía en el sur gran parte de su producción de azúcar, algodón y pisco. Además, ambos países estaban unidos indisolublemente por la mutua producción minera de plata, cobre y oro. La guerra cerró temporalmente los mercados y echó por tierra el equilibrio económico surgido a lo largo de los años.

Después de la emancipación política de los dos estados, la situación comercial se hizo escabrosa. Más aún, a partir de los años treinta comenzó una virtual guerra de aranceles. Los bajos precios de las harinas estadounidenses afectaron gravemente la exportación de harina chilena al Perú. Además, la importación de productos manufacturados británicos aumentó rápidamente, hasta saturar los pequeños mercados latinoamericanos. Los puertos del Callao y Valparaíso comenzaron a rivalizar por el control de las importaciones europeas.

La mejor posición del puerto chileno respecto al Cabo de Hornos le reportó una ventaja inalcanzable, que aumentó más todavía al inaugurarse la navegación a vapor en 1840. En 1834, el cónsul británico en Lima reconocía que gran parte del volumen comercial peruano, boliviano y argentino (Cuyo), se realizaba a través de las aduanas de Valparaíso.⁴ Por su parte, la administración peruana inició una política abiertamente contra los intereses de Chile, al favorecer -por la vía de los aranceles e impuestos- los envíos ultramarinos que llegaran al Callao sin haber recalado previamente en puertos chilenos.⁵

³ Kennedy Alencar, “Ação do país na Guerra do Paraguai vai seguir inédita”, *Folha de São Paulo*, 16/12/2004.

⁴ Informe de Belford A. Wilson del 15/1/1834. En Heraclio Bonilla (editor), *Gran Bretaña y el Perú, 1826-1919. Informes de los cónsules británicos*, Lima, 1975-1977, p. 87, vol. I.

⁵ Según el Código Comercial peruano de 1833, los envíos que no pasaran por Chile previamente, se beneficiaban hasta con un 13% respecto de los demás.

Diego Portales, artífice de la guerra, veía en ella tres elementos importantes para la consolidación del régimen conservador. En primer lugar, derrotar por completo la competencia económica peruana, que tendía a beneficiar en última instancia al Perú. Su propia experiencia -había vivido y comerciado en 1822 en Lima y, además, seguía ligado de cierta forma al negocio de exportación- le indicaba que el Perú era un país con muchos más atributos naturales para convertirse en un peligroso rival de Chile. Los mismos británicos tenían la impresión de que el Perú era un mercado mucho más próspero, a futuro, que lo que representaba Chile, considerado tradicionalmente como un país pobre.⁶

En segundo lugar, la eliminación del Perú como potencial rival, convertiría a Valparaíso en el emporio del Pacífico, lo que traería aparejado para Chile un sitio preponderante en el área.

Y en tercer término, Portales trataba de quitarle a la oposición liberal chilena liderada por los generales Ramón Freire y Bernardo O'Higgins, su base de operaciones y financiamiento que estaba radicada en el Perú, y, de paso, implantar el terror político al interior del país para solventar su debilitado régimen. Portales señalaba con calculada exageración que "la posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el Gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio (...) La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Por su extensión geográfica; por su mayor población blanca; por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora; por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo (...) Pero intrigará [Santa Cruz] en los partidos, avivando los odios de los parciales de O'Higgins y Freire, echándolos unos contra otros (...) Los chilenos que residen en Lima están siendo víctimas de los influjos de Santa Cruz".⁷

El gobierno de Portales fue extremadamente débil. Debió soportar dieciséis intentos de subversión, incluidos las frustradas invasiones del coronel Barnachea en 1831, que desembarcó en Arauco para sublevar a los mapuches de la zona, y del general Freire en 1836, que ocurrió en Chiloé. Ambas fueron organizadas en el Perú.

El gobierno conservador reaccionó violentamente contra todas estas alteraciones, las que por lo general tenían como centro al Ejército. En julio de 1831, agosto de 1833 y enero y noviembre de 1836 hubo estados de sitio en todo el país; además, en enero de 1837 se establecieron consejos de guerra permanentes y la pena de fusilamiento para

⁶ Hernán Ramírez Necochea, "El gobierno británico y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana", *Revista Chilena de Historia y Geografía*, N° 121, Santiago, 1961, p. 127.

⁷ Carta de Portales del 10/9/1836. En Raúl Silva Castro, *Ideas y confesiones de Portales*, Santiago, 1969, p. 64/65.

quienes quebrantaran la relegación o el destierro.⁸ El abanico de medidas represivas iba de la relegación al interior del país, pasando por la prisión en la isla de Juan Fernández, hasta la expulsión del país o el fusilamiento.

Un caso extremo fue el ajusticiamiento del coronel José Antonio Vidaurre, el autor intelectual de la trágica muerte de Portales. Por otra parte, el encono en terminar con los intentos desestabilizadores del partido pipiolo [liberal] y por instaurar castigos ejemplarizadores, llevó al gobierno a fuertes desacuerdos con el Poder Judicial, mediatizado ya lo suficiente a través de la legislación de esos días. Fue así que en dos oportunidades -en los casos del coronel José Arteaga en 1833 y del general Freire en 1836, cuando la autoridad exigía la pena de muerte-, el conflicto fue más que patente. Incluso en noviembre de 1836, Portales ordenó la detención de los magistrados Manuel Antonio Recabarren y José Bernardo Cáceres, por haber conmutado la pena de muerte por destierro en el caso de Freire.

El gobierno chileno, de igual manera que lo hacía el peruano, se dedicó a apoyar a los líderes de la oposición limeña. Entre éstos destacaban Agustín Gamarra, Manuel Ignacio Vivanco, Ramón Castilla, Manuel Pardo y Antonio Gutiérrez de la Fuente. Varios de ellos habían sido o llegaron a ser presidentes de su país y, mientras duró la crisis, tuvieron su cuartel general en Santiago. Comenzada la guerra, estos caudillos se unieron a las fuerzas chilenas, las acompañaron hasta el país vecino y actuaron con sus hombres en los diversos combates y batallas que se desarrollaron con el Ejército confederado.

La Confederación Peruano-Boliviana había surgido a principios de 1836, debido a la anarquía que campeaba en el Perú. Los caudillos Felipe Salaverry, Agustín Gamarra y Luis José Orbegoso se disputaban el control de la situación. Así las cosas, no le fue difícil al mariscal Andrés de Santa Cruz, líder indiscutido en Bolivia, dominar el Perú y proclamarse su Supremo Protector. Creó una Confederación de tres miembros: Bolivia y los estados sur y norperuanos. La empresa era de envergadura y abría las puertas a las capacidades ocultas de las diversas regiones de dos países grandes y potencialmente ricos. Si la Confederación hubiese perdurado en el tiempo y la situación política interna fuese estable, el desarrollo de esa área habría sido indudablemente distinto.

Sin embargo, la idea de la Confederación no despertó muchas simpatías. Sobre todo porque la aristocracia limeña se veía perjudicada. Ésta no soportaba muy bien las

⁸ "Ciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: Los díscolos, los que no quieren resolverse a vivir del trabajo, los que aislados de la moderación del Gobierno han hecho profesión de conspirar, siguen tenaces en sus maquinaciones y no perdonan medio, por horrible que sea, para conseguir un trastorno que suma a la República en males cuya perspectiva horroriza..." Firmado por Prieto y Portales. Documento del 7/11/1836 que pide estado de sitio por seis meses. En Raúl Silva Castro, *op. cit.*, p. 135/136.

dictaduras de personalidades extranjeras -como se había visto en el caso de Bolívar- y menos todavía la de un mestizo, como en el régimen de Santa Cruz. Y lo más importante, la Confederación quitaba de sus manos el control sobre la Sierra. El estado surperuano daba autonomía a Arequipa, región que veía con simpatía la nueva unión, ya que le abría camino para comerciar con el altiplano boliviano, su mercado tradicional por siglos. En resumidas cuentas, la Confederación fue una construcción relativamente artificial que tropezaba con la oposición de Lima y todo el norte peruano, regiones que se veían despojadas de sus ancestrales privilegios. Los caudillos limeños no dudaron en estrechar filas con Portales.

Otro tanto ocurrió con Argentina. Las provincias transandinas también veían con malos ojos al nuevo estado, pues les afectaba sus intereses comerciales y daba consistencia a Bolivia, territorio siempre codiciado por Buenos Aires. De este modo, las tropas de Salta y Jujuy estuvieron prontas a intervenir en el conflicto para destronar a Santa Cruz y su utopía unionista. Sin embargo, nunca se llegó a una alianza de hecho o a una simple coordinación con Chile, y ambos ejércitos pelearon separadamente. Sus propias rivalidades pronto habrían de desatarse. De este modo, la suerte del mariscal boliviano y su proyecto estaba echada.

Debido a la situación interna de Chile, la guerra no fue muy popular, pues era vista por el pueblo como un conflicto particular de Portales y en beneficio de los grandes empresarios. Recién el asesinato del Ministro sirvió para cambiar poco a poco el ánimo de la población; los primeros triunfos guerreros hicieron el resto. El regreso de las tropas del general Manuel Bulnes a Santiago, en 1839, encontró a una muchedumbre enardecida y jubilosa.

Hasta el inicio de la primera campaña al Perú, la guerra fue francamente detestada. Un testigo europeo de los acontecimientos relata el ambiente general que se vivía: “La guerra no parece despertar tanto interés como entre nosotros. Ésta era ya la segunda expedición que se preparaba, habiendo fracasado la primera. Se hablaba de la pasada con indiferencia y de la futura sin entusiasmo ni gran temor”.⁹

Se hizo preciso recurrir a la leva forzosa para formar un ejército medianamente efectivo. La Guardia Nacional no era suficiente. El mismo Portales se daba cuenta de la falta de tropa y escribía en marzo de 1837: “Empéñese en la recluta de vagos, cuchilleros, etc.; aprovechemos esta ocasión para purgar los pueblos de esta langosta y hacerles a los malos el bien de mejorar de suerte, porque la del soldado no es tan mala”.¹⁰

⁹ Ignacio Domeyko, *Mis viajes. Memorias de un exiliado*, Santiago, 1976, p. 348, vol. I. Los diplomáticos británicos afirmaban otro tanto. En Hernán Ramírez Necochea, *op. cit.*, p. 126.

¹⁰ Raúl Silva Castro, *op. cit.*, p. 101. “El Ejército [en 1837], entre tanto, se aumentaba y se disciplinaba, y como los voluntarios no acudieron a engrosar sus filas en la cantidad

En junio de 1837 se debió aumentar a 12 pesos la prima de enganche por cada soldado incorporado.

La primera campaña del Ejército Restaurador estuvo plagada de sinsabores. Movilizar todo el Ejército en una guerra impopular significaba un enorme riesgo, sobre todo si el control sobre éste era magro. Cuando las tropas comenzaban a concentrarse para emprender el viaje al frente, se produjo la sublevación del jefe del Estado Mayor en Campaña, coronel Vidaurre, la que terminó trágicamente con el asesinato de Portales, el Ministro de Guerra. Este suceso causó gran conmoción en todo el país y principalmente al interior del Ejército. Recuperado parcialmente éste, la expedición logró partir el 15 de septiembre de 1837, con un contingente de 3.720 hombres.

Después de algunas escaramuzas en territorio peruano, el vicealmirante Manuel Blanco Encalada, jefe del Ejército expedicionario, llegó a un acuerdo con Santa Cruz, por medio del cual el jefe altiplánico retiraba todos sus supuestos agravios a Chile y aseguraba una paz duradera entre ambos países. El tratado de Paucarpata, firmado a las afueras de Arequipa el 17 de noviembre, fue recibido con desagrado por el gobierno chileno, pues éste significaba en los hechos convivir a futuro con la Confederación. Blanco Encalada fue destituido y enjuiciado aparatosamente, para no dejar dudas sobre las intenciones chilenas. El jefe militar no volvió a mandar tropas y luego fue enviado como embajador a Francia, finalizando en la práctica su carrera castrense.

Bulnes partió en agosto de 1838 rumbo al norte. Pese a las dificultades internas, a la impopularidad de la guerra y las luchas entre fracciones diversas, Santa Cruz encaró con decisión el conflicto, llegando a contar con un Ejército de 16.000 hombres, 11.000 de los cuales eran peruanos.¹¹ Bulnes ocupó rápidamente Lima, donde la clase alta capitalina lo recibió como un salvador. La definición se produjo en enero de 1839, cuando las tropas chilenas se aventuraron en la Sierra para liquidar la resistencia de los confederados. En las batallas de Buin y Yungay se selló el triunfo chileno.

La guerra fue dura y sangrienta. En Yungay, por ejemplo, a unos 3.000 metros de altura, en una época de lluvias torrenciales y fríos intensos, se efectuó una de las batallas más violentas que se tenga recuerdo. Santa Cruz presentó al combate 6.000 hombres y Bulnes 5.300 soldados (800 de ellos eran peruanos). El saldo fue dramático: 1.400 muertos del bando confederado y 1.300 del chileno.

necesaria, la leva forzosa arrancaba reclutas de las aldeas y fincas rústicas para llevarlos al campo de instrucción de Las Tablas, cerca de Valparaíso". En Ramón Sotomayor Valdés, *El Ministro Portales*, Santiago, 1973 (1875), p. 135.

¹¹ Alberto Flores Galindo, "El militarismo y la dominación británica (1825-1845)", *Nueva Historia General del Perú*, Lima, 1980, p. 116.

El triunfo chileno terminaba con la supremacía ancestral del Perú sobre Chile. Además, Chile ponía en el poder a Gamarra y desalojaba a Santa Cruz y a todos sus rivales. Esta guerra preventiva aseguraba para los siguientes decenios la supremacía chilena en el área, cuestión que tendió a reforzarse más todavía con la siguiente guerra exterior chilena.

Achacarle a Portales un sentimiento anexionista o imperialista -*geofagia* la llama un autor boliviano-¹² es un argumento bastante débil, pues al menos sus sucesores se retiraron del Perú sin un botín territorial. Se limitaron a derrotar a Santa Cruz. Sin embargo, Chile sí buscó neutralizar al Perú, tratando de apoyar a líderes peruanos que no le fueran confrontacionales. Esto queda en evidencia, por ejemplo, en la actitud de árbitro que demostraba el propio Portales, al afirmar, en febrero de 1837, que “las fuerzas auxiliares chilenas no se opondrán, por cierto, a que el general Gamarra mande en el Perú, si su elección viene de la voluntad nacional libremente expresada; pero en las fuerza auxiliares chilenas encontraría un obstáculo para apoderarse del mando contra la voluntad nacional (...) El general Gamarra no inspira confianza”.¹³

La Guerra del Pacífico

El enfrentamiento bélico de 1879 debe entenderse como una salida casi desesperada a la crisis que azotaba a Chile desde mediados de los años setenta, producto de la baja de los precios internacionales del cobre, base de las entradas fiscales, y el reemplazo del ciclo cuprífero por el ciclo salitrero, al apoderarse de los territorios peruano y boliviano que ya producían, al inicio de la guerra, gran cantidad de nitrato.¹⁴

Para este modo de actuar existían antecedentes que avalaban la empresa. Chile ya se había enfrentado en una oportunidad con los dos contrincantes (Guerra contra la Confederación) en un conflicto por el dominio comercial de la costa occidental de Sudamérica. Y el sistema económico y financiero del país sufría una momentánea crisis que debía ser solucionada en forma rápida, abriendo nuevos mercados para sus productos agrícolas y capitales mineros, los que, terminada la guerra, avanzaron vertiginosamente a la conquista de las oficinas salitreras de Antofagasta y Tarapacá.¹⁵

¹² Javier Murillo de la Rocha, *op. cit.*, p. 110.

¹³ Raúl Silva Castro, *op. cit.*, p. 67.

¹⁴ Alain Joxe, *Las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno*, Santiago, 1970, p. 46.

¹⁵ Sobre los intereses económicos en la guerra, véase a Luis Ortega, “Los empresarios, la política y los orígenes de la Guerra del Pacífico”, *Contribuciones FLACSO*, N° 24, Santiago, 1984.

Además, había problemas fronterizos pendientes con Bolivia, los que se zanjaron provisionalmente con el tratado de 1874, pero que a la vez impedían la rápida penetración económica chilena en la zona en litigio (Antofagasta-Cobija).

En 1842, luego que una comisión explotadora confirmara la existencia de guano, salitre, plata y cobre, Chile dispuso el límite de su frontera con Bolivia hasta el despoblado de Atacama promulgando una ley que declaraba de propiedad nacional las guaneras de Coquimbo, del desierto de Atacama e islas adyacentes.

Entonces, el gobierno de Bolivia alegó que tenía derechos sobre los territorios que Chile reclamaba como suyos. En 1866, ambos países firmaron un tratado que estableció un límite claro entre las naciones - el paralelo 24-, confirmado en el tratado de 1874 y decidieron repartirse las ganancias obtenidas en una determinada franja del desierto, ubicada entre los paralelos 23 y 25 grados.¹⁶

La guerra sorprendió de algún modo al Ejército, pues se encontraba movilizado en el sur. En 1878, más de la mitad de sus efectivos estaban en Arauco. De haber sido tradicionalmente un Ejército de guarnición con dos a tres mil hombres, pasó a convertirse, en pocos meses, en una máquina de guerra de decenas de miles de soldados.¹⁷ Ésta fue una prueba de fuego que se venció con muchos esfuerzos. Sin embargo, el estado de preparación del Ejército era más bien bajo. Por ejemplo, no había un Estado Mayor y recién se debió pensar en crearlo.¹⁸ Además, y debido a la falta de una infraestructura educativa mínima (no existía aún una Academia de Guerra), la preparación de la oficialidad dejaba mucho que desear, pues casi no se conocían las experiencias de la Guerra Franco-Prusiana que marcó época en cuestiones de táctica y estrategia, principalmente el ataque en orden disperso, y las armas de caballería y artillería estaban subdesarrolladas, por lo que prácticamente no tuvieron actuación en las campañas del norte. Pero por fortuna para los militares chilenos, la preparación de los Ejércitos vecinos era aún más deficiente y los problemas políticos de esos países fueron claramente decisivos en el triunfo nacional.

La guerra se caracterizó por dos fases bien definidas. La primera se desarrolló entre 1879 (ocupación de Antofagasta, puerto boliviano, por tropas chilenas sin declaración

¹⁶ Más detalles en Carlos Bustos, *Chile y Bolivia: Un largo camino*, Santiago, 2003.

¹⁷ Durante la guerra hubo varios ejércitos operando en Chile y en territorio peruano: el **Ejército del Sur** que estaba en Arauco, el **Ejército del Centro** que operaba como ejército de reserva y que estaba acantonado en San Bernardo, y el **Ejército en Campaña** propiamente tal que estaba en el norte. Existían, además, la **Guardia Nacional sedentaria** en Chile y la **Guardia Nacional movilizad**a en el Perú. En un momento llegó a haber unos 70.000 hombres en armas, pero no pasó nunca de 25.000 la cantidad de soldados destacados en el Perú.

¹⁸ Teniente coronel Edmundo González Salinas, *Historia militar de Chile*, Santiago, 1970, p. 14, vol. II.

de guerra) y 1881 (ocupación de Lima). Fue eminentemente marítima en su inicio, pero luego hubo importantes combates terrestres en la zona peruana de Tarapacá. En 1880, luego de la batalla de Tacna, el Ejército boliviano se retiró del conflicto, y el Perú quedó prácticamente a merced de los chilenos que ya dominaban sin contrapeso en el mar.

Esta etapa terminó con la sangrienta toma de Lima, inmediatamente después de las grandes batallas de Chorrillos, San Juan y Miraflores, en enero de 1881. Las tropas chilenas sufrieron un total de 5.443 bajas (1.299 muertos), equivalente más o menos a un cuarto de todo el contingente movilizado.

La segunda fase se extendió entre 1881 y 1883 (firma del tratado de paz de Ancón que permitió el regreso de las fuerzas chilenas). Esta última parte de la guerra se desarrolló íntegramente en territorio peruano y tiene, paradójicamente, un parecido casi fotográfico a la Guerra contra la Confederación, ya que el Ejército chileno pasó a dominar completamente la situación en la costa peruana, convirtiéndose en verdadero factor de orden y estabilidad para la oligarquía peruana, transformada de la noche a la mañana en ferviente partidaria de los militares chilenos. La situación de virtual efervescencia social entre las clases campesinas y urbanas del Perú obligó a que las tropas chilenas permanecieran en la costa -de la frontera con el Ecuador a Iquique- hasta que fuera superada la crisis política interna del país y sus clases dirigentes estuvieran en condiciones de darse un aparato estatal lo suficientemente poderoso como para permitir la salida de los soldados chilenos, sin que se produjera una sublevación popular.¹⁹

Abundan los testimonios sobre la seguridad que brindaban las tropas chilenas. Por ejemplo, el embajador alemán en Chile afirmaba en 1882 que “en general en Lima se tiene temor de que después de la retirada de las tropas chilenas podría producirse algún desorden que hiciese peligrar la vida y la propiedad de los extranjeros”²⁰ y que “en las sesiones secretas del Senado en ésta [Santiago], en las cuales se deliberó acerca de continuar la ocupación, se hizo destacar especialmente el punto de vista de que ni los altamente remunerados funcionarios civiles enviados al Perú, como tampoco los peruanos que todavía eran propietarios, tenían un vivo interés en una rápida evacuación”.²¹

Aunque la ocupación chilena protegió en cierta medida los intereses de los limeños y costeños más acaudalados frente a eventuales sublevaciones populares, tampoco

¹⁹ Al respecto, véase a Heraclio Bonilla, “El problema nacional y colonial del Perú en el contexto de la Guerra del Pacífico”, *Un siglo a la deriva. Ensayos sobre el Perú, Bolivia y la guerra*, Lima, 1980, pp. 177-225.

²⁰ Informe del embajador alemán Schenck en Santiago, 18/7/1882, *Informes inéditos de diplomáticos extranjeros durante la Guerra del Pacífico*, Santiago, 1980, p. 97.

²¹ Informe del embajador alemán Schenck en Santiago, 1/8/1882, *ibíd*, p. 104.

es menos cierto que se trató de una humillación innecesaria que se prolongó por casi tres años. Hay que tomar en cuenta que Lima fue sometida a la ley marcial y la administración de justicia, correo y otros servicios esenciales fueron ejercidos por funcionarios chilenos. Como señala un cronista, las dependencias de la Biblioteca y el Archivo Nacional fueron tomadas por las fuerzas chilenas, y sus dependencias convertidas “en cuadras para los soldados del batallón «Curicó»”.²² Contemporáneo de los eventos, relata que “el saqueo se ha hecho extensivo a los museos Raimondi y anatómico de la escuela de Medicina, instrumentos de la escuela de Minas, biblioteca de la universidad y biblioteca pública (...) Los muebles de las oficinas de Palacio desaparecen y los archivos de Relaciones Exteriores y Hacienda se encajonan para ser transportados a Chile”.²³ Asimismo, la población de ciudades y villorrios ocupados fue grabada con contribuciones de guerra en dinero y especies.

En un comienzo, los ocupantes chilenos permitieron que se formara un gobierno peruano provisorio a cargo de Francisco García Calderón. Fue establecido en febrero de 1881 en la aldea de Magdalena, fuera de la capital peruana; actualmente es un distrito más de la ciudad. Luego se trasladó a Chorrillos estableciendo un Congreso. Pero sólo fue tolerado hasta septiembre de 1881. En noviembre, García Calderón, junto a otros notables, fue deportado a Chile por negarse a negociar un tratado de paz que implicaba la anexión de Tarapacá. Todos fueron confinados en Angol, en la inhóspita frontera araucana. Ricardo Palma, acérrimo opositor suyo, los motejó de “achilenados”.²⁴

En la lógica de arbitrar entre las diversas facciones peruanas, los ocupantes lograron que el gobierno provisional enviara tropas, armadas con pertrechos suministrados por las fuerzas chilenas, a combatir la resistencia de Nicolás de Piérola y Andrés Avelino Cáceres en el interior del país, dos caudillos que se resistían a la ocupación. Piérola había huido a Ayacucho donde estableció un gobierno paralelo. Sin embargo, a los pocos meses (diciembre de 1881), regresó a Lima para negociar un tratado de paz y fundar el Partido Demócrata. Sin haber logrado su objetivo, en marzo de 1882 se marchó a Europa.

Con razón, un observador peruano de la época sostenía que “los caudillejos del sur, centro y norte han colocado al Perú en la triste condición de un país sin gobierno con quien pueda entenderse Chile, en caso de tener que abrirse negociaciones de paz”.²⁵

²² Ricardo Palma, *Crónicas de la guerra con Chile*, Lima, 1984, p. 46.

²³ Ricardo Palma, *Cartas a Piérola sobre la ocupación chilena de Lima*, 1979, 2da. edición, p. 27.

²⁴ Ricardo Palma, *Crónicas...*, *op. cit.*, p. 22.

²⁵ *Ibíd*, p. 135.

García Calderón fue sustituido por su vicepresidente, el almirante Lizardo Montero, quien, no dispuesto a colaborar con los ocupantes, deambuló por varias ciudades de la Sierra (Huaraz, Arequipa), hasta que fue derrotado por las fuerzas chilenas en Arequipa a fines de 1883, prácticamente sin presentar combate. Huyo a Europa vía La Paz.

Debido a que la resistencia aumentaba en la Sierra, el Ejército chileno debió utilizar unos cinco mil hombres para combatir a Cáceres, quien había movilizado a los campesinos indígenas de los valles del Mantaro y Ayacucho, dividiendo prácticamente al país en dos. El Ejército chileno ya tenía experiencia suficiente en luchar contra indígenas, específicamente contra los mapuches; pero tuvo muchas bajas por la difícil geografía serrana, las inclemencias del clima y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la población local. Justamente el Combate de la Concepción (9 y 10 de julio de 1882), donde murieron 80 efectivos chilenos, muchos de los cuales fueron mutilados sexualmente por sus contrincantes, se explica por la reacción indígena frente a las arbitrariedades de las tropas chilenas (violaciones, incendio de plantíos y viviendas, fusilamientos sumarios, etc.).²⁶

Por último, el general Miguel Iglesias, quien había sido Ministro de Guerra de Piérola, estableció su propio gobierno con la aquiescencia de Chile en agosto de 1882. Luego de la definitiva victoria sobre Cáceres (batalla de Huamachuco, julio de 1883), Iglesias fue convencido por los chilenos para que firmara el Tratado de Ancón. Después de su ratificación sobrevino una guerra civil entre sus partidarios y los de Cáceres, conflicto que duró hasta 1885.

La Anexión

Desde inicios del conflicto, quedó claro que las autoridades de Santiago habían determinado que el país debía anexarse los ricos territorios salitreros del norte, pasando por encima de tratados vigentes. Por ejemplo, el Presidente Aníbal Pinto le escribía al embajador chileno en Lima, en febrero de 1879, días después de la ocupación de Antofagasta, que “una vez establecidos en el litoral nos será imposible el abandonarlo. La población de este territorio, como usted sabe, es en su gran mayoría chilena, y chilenos son en su totalidad los intereses radicados en él. A esto se agrega que la cesión que de ese territorio hicimos a Bolivia nunca fue aprobada por la opinión de este país. Devolver a Bolivia el territorio comprendido

²⁶ “En [La] Concepción perecieron varios oficiales vinculados a los círculos de la aristocracia chilena. El capitán Ignacio Carrera Pinto era sobrino carnal del Presidente Aníbal Pinto y descendiente del prócer José Miguel Carrera. El subteniente Julio Montt era hijo del Ministro de Guerra. El subteniente Arturo Pérez Canto era sobrino del coronel Estanislao del Canto; siendo también de ascendientes ilustres el alférez Luis Cruz Martínez. No es de extrañar, por ello, que esta acción, relativamente modesta, provocase una gran conmoción en Chile”. En Nelson Manrique, *Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile*, Lima, 1981, p. 194.

entre los grados 23° y 24° sería considerado aquí como la entrega de una de nuestras provincias a una potencia extranjera”.²⁷

Esta política quedó meridianamente clara en el ultimátum que el gobierno chileno presentó a sus dos rivales durante la conferencia de paz que se efectuó, gracias a una mediación de Estados Unidos, entre el 20 y el 27 de octubre de 1880 a bordo de la corbeta estadounidense *Lackawanna* en la bahía de Arica.

“Chile puso las siguientes condiciones de paz:

- 1.- Cesión de la provincia peruana de Tarapacá con Iquique y la faja costera boliviana con Antofagasta y Cobija.
- 2.- Pago de una compensación de guerra de 20 millones de pesos.
- 3.- Devolución de las propiedades confiscadas por Perú y Bolivia a ciudadanos chilenos.
- 4.- Devolución del barco de transporte chileno *Rimac*, capturado por un barco de guerra peruano.
- 5.- Anulación del tratado secreto existente entre Perú y Bolivia y renuncia a la formulación de una Confederación Perú-Boliviana.
- 6.- Derecho de ocupación del territorio peruano de Moquegua, Tacna y Arica hasta el cumplimiento de las condiciones antedichas.
- 7.- Obligación del Perú de no transformar Arica en plaza fortificada”.²⁸

Luego de la ocupación de Lima y toda la costa peruana y el apresamiento de García Calderón, las exigencias chilenas aumentaron considerablemente, lo que traería más tarde funestas consecuencias diplomáticas y militares. A partir de entonces, Chile reclamó el derecho a la “ocupación del territorio de Tacna y Arica, es decir, de la provincia peruana de Tacna durante diez años. Al término de ese período pagará Perú 20 millones de pesos de gastos de guerra a Chile; en caso contrario, pasa la provincia de Tacna definitivamente a Chile (...) Se cree aquí que las exigencias de reparaciones de 20 millones conducirá a la obtención definitiva de la provincia peruana de Tacna para Chile. El Ministro del Exterior mismo acotó que Perú en este momento no estaría en condiciones de pagar los 20 millones y que probablemente tampoco en mejores condiciones luego del período de ocupación de diez años”.²⁹

El embajador alemán en Santiago comentaba que “las expectativas de paz con el Perú se han desarrollado en forma favorable en las últimas semanas. Se comienza por el lado peruano a abandonar la posición de la imposibilidad de una cesión territorial y a mostrarse más dispuesto a negociar. Las medidas opresivas del

²⁷ Gonzalo Bulnes, *Las causas de la guerra entre Chile y el Perú*, Santiago, 1919, p. 107. (Estos paralelos incluyen los puertos de Antofagasta y Mejillones).

²⁸ Informe del cónsul alemán H.A. Schlubach, Santiago, 15/11/1880, *op. cit.*, p. 60.

²⁹ Informe del embajador alemán Schenck, Viña del Mar, 27/2/1882, *ibíd.*, p. 91/92.

comandante en jefe chileno en Lima han producido al parecer sus efectos. La primera contribución de 1.000 pesos de plata de cincuenta notables de Lima fue recaudada con dureza y ocurrió el 21 del corriente; la siguió una segunda contribución, por el mismo monto, a otros cincuenta notables de Lima. Parece haber resultado adecuado para ese efecto el sistema de que el comandante en jefe elija y nombre individualmente a las personas que tienen que efectuar el pago”.³⁰

En el caso boliviano, Chile también ejerció fuerte presión política y militar sobre las autoridades de La Paz para que firmaran la tregua. En noviembre de 1883, Chile se apoderó de Arequipa y Puno, incluida la ribera peruana del lago Titicaca. Según el embajador alemán en Santiago, esto “motivó al gobierno boliviano el rápido envío de una embajada a Santiago con el propósito de negociar la paz”.³¹ Señala también que “como se desprende de un informe del cónsul imperial en La Paz, existió allí durante la última parte de las negociaciones, a consecuencias del desplazamiento de algunas tropas desde Arequipa, el fuerte temor de que se habría puesto en movimiento una invasión chilena, lo que ejerció una sana influencia en la marcha de las negociaciones”.³²

Concluida la Guerra del Pacífico, Chile había derrotado militarmente a sus dos vecinos del norte y les había impuesto severas condiciones para firmar la paz y terminar con la ocupación del Perú. Éstas incluían reparaciones de guerra y la anexión de amplios territorios. Además de la postración económica y el desorden político derivados del conflicto, el Perú debió soportar la cesión de Tarapacá y dejar en suspenso el futuro de Tacna y Arica. Bolivia, por su parte, se vio en la necesidad de entregar 400 kilómetros de costa y más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio. Estas provincias anexadas poseían varios núcleos urbanos importantes -Iquique y Antofagasta, entre otros- e innumerables yacimientos de salitre, cobre, plata y oro.

La Posguerra

Es interesante constatar que en el imaginario colectivo chileno, prácticamente no se tiene conciencia de que a la Guerra del Pacífico, penosa y sangrienta de por sí, le siguió una posguerra compleja y peligrosa como la guerra misma. En más de una ocasión, los tres adversarios estuvieron al borde de una nueva conflagración.

El surgimiento de nuevas fronteras implicó nuevos desafíos para la seguridad de Chile. En 1885 se destinó aproximadamente el 35% del contingente militar a la

³⁰ Informe del embajador alemán Schenck, Santiago, 23/9/1882, *ibíd*, p. 107.

³¹ Informe del embajador alemán Schenck, Santiago, 24/11/1883, *ibíd*, p. 135.

³² Informe del embajador alemán Schenck, Santiago, 12/4/1884, *ibíd*, p. 137/138.

guarnición de Arauco para mantener a raya a los mapuches, y casi el 30% a proteger la zona entre Tacna y Antofagasta. Algo similar ocurrió en 1886.

El Ministro de Guerra era muy elocuente al explicar la necesidad de enviar tropa al norte: “Estas fuerzas prestan en el norte, tanto en el servicio de guarnición, cuando el de policía fronteriza, indispensable en territorios que acaban de incorporarse al país, que aún no están asimilados a él y con los cuales circunstancias que conocéis, imponen medidas precautorias en la línea divisoria con el Perú. Además, la condición misma de la industria de Tarapacá y de Antofagasta y las obras que se llevan a cabo en el último territorio, requieren en esos centros apartados de trabajo la presencia de fuerza pública que haga cumplir las prescripciones de las leyes y los mandatos de las autoridades y que den a todos garantías de orden”.³³

A ello se sumó una difícil relación con Argentina, país que, según el convencimiento popular chileno, habría aprovechado la guerra en el norte para conseguir ventajas en disputas limítrofes con Chile. Luego de grandes aprestos bélicos que llevaron a ambos países al borde de la guerra en 1898, en 1902 se firmaron los pactos de mayo que produjeron un gran alivio a la compleja situación estratégica de Chile.

La posguerra duró aproximadamente 46 años. Comenzó con el Tratado de Ancón de 1883 y terminó con el acuerdo de 1929 que significó el retorno de Tacna a manos peruanas. Este período se caracterizó por la *chilenización*, a veces compulsiva, de Tarapacá y Antofagasta mediante las Ligas Patrióticas; el incremento de la presencia e influencias chilenas gracias a la construcción del ferrocarril Arica-La Paz; la tensión por el fracasado plebiscito sobre el futuro de Tacna y Arica; la ulterior devolución de Tacna y la persistencia de fuertes tensiones diplomáticas entre Chile y sus antiguos rivales.

Las relaciones entre Chile y el Perú entre 1901 y 1928 fueron muy difíciles, tanto que hubo dos largas interrupciones de las relaciones diplomáticas entre 1901 y 1905 y entre 1910 y 1928. Además, hubo un rompimiento de relaciones consulares en 1918 que duró hasta 1928, que incluyó el cierre de la frontera común entre 1925 y 1928. Más encima, este período estuvo signado por una diplomacia secreta por parte de los tres adversarios, lo que exacerbó los ánimos más que aplacarlos, obligando a terceras potencias (España, Estados Unidos, Liga de las Naciones entre otras) a esporádicas intervenciones, la mayoría de ellas sin éxito.

Durante la posguerra la diplomacia chilena tuvo una actitud más bien errática destinada a quedarse con las provincias de Tacna, Arica y Antofagasta a cualquier precio (Tarapacá ya había sido anexada a perpetuidad por el Tratado de Ancón),

³³ *Memoria del Ministerio de Guerra*, Santiago, 1885, p. XI.

no importando mucho la relación futura, ni tampoco qué se ofrecía y a quién. Esta estrategia de suma cero que trataba de conseguir pequeñas ventajas indisponiendo a los dos antiguos aliados, mediante la negociación por separado con el Perú y Bolivia, avivó más todavía las suspicacias y recelos mutuos de las tres élites.

Sin embargo, los dirigentes más preclaros comprendieron tempranamente que la anexión de todo el litoral boliviano implicaba una medida extrema que debía ser revertida, en parte para lograr, simultáneamente, eliminar la vecindad con el Perú. Es así que Domingo Santa María, Canciller en 1879, escribía en una carta al Ministro de Guerra, Rafael Sotomayor, luego de concluida la guerra, que “no podemos ahogar a Bolivia. Privada de Antofagasta y de todo el litoral que antes poseía hasta el Loa debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia. Al contrario, debemos sustentar su personalidad como el más seguro arbitrio de mantener la debilidad del Perú”.³⁴

En el caso boliviano, Chile presionaba con el control de los accesos marítimos hacia el Altiplano y las aduanas, con cuyo cobro se pagaba por la indemnización que el gobierno de Bolivia debía entregar por la guerra perdida, lo que implicaba una onerosa carga para el vecino altiplánico. En 1895, a cambio de asegurar la anexión de Antofagasta, por primera vez Chile mostró interés en solucionar la mediterraneidad boliviana prometiendo a La Paz la cesión de los territorios peruanos retenidos o, al menos, un puerto en Arica o cerca de allí, inmediatamente después de solucionada la propiedad de Tacna y Arica mediante un plebiscito. Después de largas disquisiciones, el convenio fue rechazado por los Congresos de ambos países. Perú le enrostró a Bolivia haber negociado respecto de territorios que se consideraban peruanos.

Chile consiguió la sanción jurídica de la anexión de los territorios bolivianos y peruanos mediante diversas presiones políticas que se extendieron por muchos años y que, en la práctica, ha sido sumamente problemática y puesta en tela de juicio permanentemente. Esto produjo una larga y penosa posguerra plagada de desencuentros diplomáticos, tensiones limítrofes y hasta aprestos bélicos. En el caso boliviano, el definitivo tratado de límites se consiguió suscribir recién en 1904, o sea veinticuatro años después que ese país abandonó las hostilidades.

Sin embargo, a partir de 1910 el gobierno boliviano volvió a plantear la necesidad de obtener un puerto sobre el Pacífico. Esta demanda se ha mantenido inalterable por casi cien años. En el caso del Perú, la situación jurídica de Tacna y Arica quedó pendiente por espacio de cincuenta años, más los setenta años que demoró la

³⁴ Luis Maira, “Las relaciones entre Chile y Bolivia y el centenario del Tratado de 1904”, Luis Maira y Javier Murillo..., *op. cit.*, p. 32.

implementación total del Tratado de 1929 que regula los servicios a que tiene derecho el Perú en Arica.

En una actitud poco decorosa de ser cierta, en 1900 Chile habría propuesto al Perú “polonizar” Bolivia. Para ello, Perú debía aceptar la anexión chilena de Tacna y Arica, a cambio de la partición de Bolivia a manos del Perú y Chile. El gobierno peruano habría rechazado de plano la idea pidiendo, de paso, el retiro del embajador chileno en Lima, Ángel Custodio Vicuña. Simultáneamente, mediante la efímera promesa de entregarle Arica o un eventual puerto, Chile presionaba a Bolivia a firmar un tratado de paz que sellara la anexión de Antofagasta y la consiguiente mediterraneidad boliviana. Esto ocurrió finalmente en 1904. El Canciller chileno Conrado Ríos Gallardo habría sugerido lo mismo nuevamente en 1928. Sobre este incidente de la “polonización” hay versiones contrapuestas y nunca aclaradas completamente. Vicuña habría señalado que la idea original había sido propuesta por el Presidente peruano Nicolás de Piérola en 1898.³⁵ Este desencuentro, sumado a otros conflictos precipitó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y el Perú.

Como parte de la presión ejercida sobre el gobierno boliviano, el representante diplomático chileno en La Paz, Abraham König, un experimentado político y parlamentario radical, dio un ultimátum el día 13 de agosto de 1900, el cual trasunta la intransigente actitud de las autoridades chilenas. En parte de dicho documento, del que luego el gobierno de Santiago trató de distanciarse, König señaló: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia. Según nuestro criterio, las bases propuestas por Chile son equitativas, las únicas compatibles con la situación actual. Sería una verdadera desgracia que el Congreso boliviano pensara de distinta manera (...) Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el Litoral. Esta entrega es indefinida, por tiempo indefinido; así lo dice el Pacto de Tregua: fue una entrega absoluta, incondicional, perpetua. En consecuencia, Chile no debe nada, no está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto (...) Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle, el opinar que Bolivia tiene derecho de exigir un puerto en compensación de su Litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con que los Estados Unidos de la América del Norte han tomado a Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el Litoral es rico y vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo

³⁵ Jaime Eyzaguirre, *Chile durante el gobierno de Errázuriz Echaurren*, Santiago, 1957, pp. 173 y 345.

guardamos porque vale: que si nada valiera, no habría interés en su conservación".³⁶

En 1901 se produjo una primera gran crisis diplomática. El Perú retiró a su Ministro en Santiago, después de denunciar la *chilenización* de la región. La Cancillería limeña consideraba inadmisibles y hostiles la actitud de Chile en una serie de hechos: clausurar las escuelas dirigidas por peruanos; trasladar a Tacna la Corte de Apelaciones que tenía su asiento en Iquique; constituir allí la jefatura de la primera zona militar; aglomerar fuerzas regulares y establecer en las aguas de Arica las escuelas que funcionaban en los buques *Almirante Cochrane* e *Ingeniero Mutilla*; otorgar concesiones sobre sustancias minerales y preparar empresas de colonización, irrigación y obras públicas; intentar que la Santa Sede segregara las parroquias de Tacna y Arica de la diócesis peruana de Arequipa, pretendiendo después que el obispo admitiera, respecto de aquellos beneficios, el patronato del Presidente de Chile; e impedir que los peruanos celebraran sus festividades patrióticas.

En 1906, en las postrimerías del gobierno del Presidente Germán Riesco, Chile propuso formalmente comprar el territorio en disputa. El Perú vio con malos ojos ese acuerdo. Tampoco contribuía a una distensión la opinión de políticos y militares en Santiago en orden a que Chile fijara definitivamente su frontera norte en Tacna, aduciendo razones de seguridad militar, argumentando que la quebrada de Camarones, al sur de Arica, no era defendible.³⁷

En 1910, el Perú rompió por segunda vez las relaciones diplomáticas, debido a que Chile expulsara a los sacerdotes peruanos de Tacna y Arica, quienes se empeñaban en obedecer las órdenes del obispado de Arequipa. Los vínculos se reanudaron recién dieciocho años después. Se sumó a ello el rompimiento de las relaciones consulares luego que el cónsul peruano de Iquique fue expulsado ignominiosamente del país.

Las Ligas Patrióticas

Un factor especialmente negativo jugaron en ese período las Ligas Patrióticas. Éstas existieron en forma intermitente desde la década del diez hasta mediados de los veinte en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, destacando claramente tres

³⁶ Jorge Gumucio Granier, *Estados Unidos y el Mar boliviano. Testimonios para la historia*, La Paz, 1985. Frente a actitudes tan agresivas de la diplomacia chilena como la arriba expuesta, resulta injusto sostener que los grupos de poder en Bolivia, por carecer aparentemente de conciencia marítima hasta 1904, "no lucharon lo suficiente para que Chile les diera una solución que no estuviera supeditada a un incierto resultado de un plebiscito, que además se había postergado indefinidamente". En Sergio González Miranda, "La tercera boliviana y el problema de la mediterraneidad", *Fuerzas Armadas y Sociedad*, Año 18, N° 1-2, Santiago, 2004, p. 33.

³⁷ Julio Pérez Canto, *El conflicto después de la victoria*, Santiago, 1918, pp. 57-66.

períodos de actividad en los años 1911-1912, 1918-1920 y 1925, fechas que coincidieron con etapas de tensión diplomática con el Perú, incluido el fallido intento de realizar un plebiscito en Tacna y Arica.³⁸ Hubo grupos organizados, generalmente armados, en Alto de Junín, Antofagasta, Arica, Caleta Buena, Dolores, Huara, Iquique, Pintados, Pisagua, Pozo Almonte y otros lugares menores. Aunque el gobierno chileno disolvió formalmente las ligas en 1911-1912 y las mantuvo a raya en los años siguientes, su actitud cómplice permitió que éstas cometieran excesos de todo tipo.³⁹ El objetivo de las ligas fue agredir con sistemática y desenfrenada violencia traducida incluso en acciones criminales, a peruanos y bolivianos residentes en esas provincias, independientemente de su posición social.⁴⁰

Las Ligas Patrióticas no “fueron creadas intencionalmente por el Estado (gobiernos de Pedro Montt o Ramón Luco), más bien parece que surgieron en forma espontánea como clubes sociales, pero los vínculos de la Intendencia [de Tarapacá] con las Ligas Patrióticas quedan claramente establecidos; especialmente bajo el mandato de don Recaredo Amengual; no por su nombramiento de Presidente Honorario de la Liga Patriótica, pues lo fue también de clubes de tiro y todo tipo de organizaciones sociales, sino por las órdenes emanadas desde la autoridad hacia las Ligas, y las consultas desde las Ligas hacia el Intendente. Sin embargo, es evidente que en los violentos años 1918 y 1919, éstas escaparon del control estatal...”⁴¹

Desde su inicio y a partir de 1918 en particular, las ligas fueron instrumentalizadas por los partidos derechistas con el fin de cooptar al proletariado salitrero, proclive al ideario socialista, y adquiriendo más tarde un carácter antisocialista y contra el reformismo de la Alianza Liberal de Alessandri; además fueron adquiriendo carácter nacional. Un distinguido historiador afirma que las ligas fueron sostenidas por el Partido Conservador y se convirtieron, “de hecho, [en] brigadas mercenarias de choque encargadas de desencadenar el terrorismo contra las organizaciones

³⁸ Un antecedente de las Ligas se encuentra en las Sociedades de Patria, creadas en 1878 por la población chilena de Antofagasta. Estas organizaciones tenían originalmente como propósito la autodefensa contra las autoridades bolivianas; después se convirtieron en un poderoso instrumento para agitar la anexión. Véase a Richard Snyder Phillips Jr., “*Bolivia in the War of the Pacific, 1879-84*”, Ph.D. dissertation, University of Virginia, 1973, p. 60.

³⁹ Según una misiva de chilenos del poblado de Caleta Buena, el gobierno chileno “en mala hora mandó disolver” las Ligas Patrióticas en 1911. En *El Eco Patrio*, Iquique, N° 57, 2/8/1919, p. 1.

⁴⁰ Sergio González Miranda, Carlos Maldonado Prieto y Sandra McGee Deutsch, “Las Ligas Patrióticas: Un caso de nacionalismo, xenofobia y lucha social en Chile”, *Canadian Review of Studies in Nationalism*, vol. XXI, N° 1-2, Prince Edward Island, 1994, pp. 57-69.

⁴¹ Sergio González Miranda, *El Dios Cautivo. Las Ligas Patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá (1910-1922)*, LOM Ediciones, Santiago, 2004, p. 123.

populares y democráticas. Por lo general, estas actividades, instigadas por grandes empresarios nacionales y extranjeros, se ejecutaban con la tolerancia y aun la complicidad de la policía.”⁴²

Un primer brote nacionalista se produjo en 1911 y 1912. Con el pretexto de rumores que al final resultaron infundados, según los cuales habría sido atacado el consulado chileno en el Callao, se creó a fines de mayo de 1911 -con la asistencia de las principales figuras de la región, encabezadas por el gobernador y oficiales del Ejército- una Liga Patriótica de Tarapacá en Iquique y otras ciudades, movimiento que luego se hizo extensivo a otras zonas del país.⁴³ Sus principales postulados eran el cierre de las escuelas y periódicos peruanos; la prohibición para que peruanos fueran maestros, empleados públicos, empleados de aduanas, de la marina mercante, de los puertos, etc.; que el ochenta por ciento de los trabajadores y empresarios fueran de nacionalidad chilena; la obligatoriedad que todos los nacidos en Tarapacá hicieran el servicio militar; la restricción y eventualmente prohibición de la inmigración peruana; el retiro del consulado peruano en Iquique por ser “innecesario”; la prohibición para que flamearan banderas peruanas en su día patrio, y la fortificación de las defensas chilenas en el norte.⁴⁴

Un segundo período de auge nacionalista se vivió entre 1918 y 1920, etapa en la cual las Ligas Patrióticas de Tarapacá y Antofagasta sembraron, con renovada saña, el terror dentro de la comunidad peruana residente que en esos años se calculaba en un tercio aproximadamente de la población total de la región; más numerosa todavía era la colonia peruana en localidades como Pica, Tacna y Arica.⁴⁵

En diciembre de 1918 el Perú debió repatriar a muchos de sus ciudadanos y a su personal consular acreditado en Chile y obligó, en los hechos, a que los cónsules chilenos abandonaran el país.⁴⁶

⁴² Hernán Ramírez Necochea, “El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970” *Araucaria de Chile*, Madrid, Año 1, N° 1, 1978, p. 11.

⁴³ De hecho, también hubo Ligas Patrióticas en Antofagasta y Valparaíso. En *Zig-Zag*, Santiago, N° 331, 24/7/1911, p. 1 y N° 355, 9/12/1911. Por ejemplo, en Valparaíso se realizó en junio una masiva concentración antiperuana calculada en veinte mil personas, con la presencia de la Liga Patriótica “Arturo Prat” de dicho puerto. En *El Pacífico*, Tacna, 19/6/1911, p. 2.

⁴⁴ *El Comercio*, Pisagua, 31/5/1911, p. 2.

⁴⁵ Según el censo de 1907, la mitad de la población de Tarapacá era extranjera (24.000 peruanos y 2.000 bolivianos). Los chilenos representaban sólo el 30% de los trabajadores. En *La Voz del Sur*, Tacna, 17/6/1911, p. 2.

⁴⁶ El 2 de noviembre de 1918 se celebró el aniversario de la toma de Pisagua, durante la Guerra del Pacífico, con un multitudinario acto de masas en Iquique, al que concurrieron diez mil personas. La animosidad contra los peruanos se hizo evidente. En *El Mercurio*, Santiago, 3/11/1918, p. 23.

Las actuaciones habituales de las Ligas Patrióticas eran actos de vandalismo y saqueo, de amedrentamiento y de acción directa como, por ejemplo, la expulsión a viva fuerza de los representantes consulares peruanos y demás ciudadanos de esa nacionalidad, los que eran sacados de sus casas a medianoche y embarcados inmediatamente hacia el norte. En otras ocasiones, estos grupos daban plazos perentorios de veinticuatro horas para que los ciudadanos peruanos abandonaran el país. Las autoridades chilenas generalmente se limitaban a dejar hacer y las tropas sólo actuaban para evitar linchamientos y otros crímenes similares. Pocos eran, además, los afectados que se atrevían a denunciar estos excesos.

A partir de 1911, los matones a sueldo contratados por las Ligas obligaron a la población peruana residente a emprender la huída a lugares más seguros. Eso ocurrió con miles de tarapaqueños –un autor habla de 18.000 personas– que, forzados por la violencia xenófoba de las Ligas y alentados en parte por las promesas de apoyo material del gobierno del Presidente peruano Augusto B. Leguía, encontraron refugio en Lima y otras ciudades del vecino país. Sin embargo, los refugiados “fueron condenados a la pobreza y por ello algunos regresaron a las salitreras desafiando todos los riesgos. Recién en los años cuarenta recibieron un terreno baldío [en el Callao], el ex fundo La Chalaca, que se llamaría más tarde Urbanización Tarapacá y que fue comprado con parte del pago realizado por Chile al Perú, después del Tratado de Lima de 1929. Las casas ofrecidas por el gobierno peruano jamás fueron construidas”.⁴⁷

Las Ligas Patrióticas nortinas sobresalieron por su agresividad no sólo de hecho sino de palabra, expresada en la publicación de un sinnúmero de periódicos y diarios ocasionales, tales como *El Ajicito* y *El Roto Chileno* en Antofagasta, *El Ajicito* en Arica, *El Corvo* en Tacna, y *El Corvo*, *El Eco Patrio*, *La Liga Patriótica*, *Lucas Gómez*, *El Machete* y *El Roto Chileno* en Iquique. Su misión era intimidar a la población peruana y a los chilenos y otros extranjeros que intentaban solidarizar con ellos.

En esta prensa de batalla existen múltiples ejemplos de nacionalismo exacerbado y odio xenófobo. Por ejemplo, a propósito del plebiscito de Tacna y Arica, un diario se preguntaba: “Lector tacneño y ariqueño, ¿prefieres que la tiranía y la civilización de cien años atrás de los peruanos se enseñoree en este querido suelo? ¿Aceptas que esa raza de cobardes, afeminados, descendientes de cocodrilos que no pueden considerarse como seres civilizados, se adueñen de lo que es nuestro? No. ¡Votad por Chile!”⁴⁸

⁴⁷ Sergio González Miranda, *El Dios Cautivo...*, *op. cit.*, pp. 19 y 21.

⁴⁸ *El Ajicito*, Arica, N° 5, 13/9/1925, p. 1. En 1925 se organizó una Sociedad Benéfica y Patriótica “El Corvo” que poseía un millar de adherentes y que publicaba el diario *El Ajicito*, y que puede considerarse como una continuadora de las Ligas Patrióticas de los años diez.

Otro periódico de Iquique publicaba el siguiente verso sarcástico y racista:

Oración para todos.

Cuando a un peruano a castigar tú vayas,
pocas palabras, dirigiste baste:
Castigo ¡Oh Dios! al cholo que criaste
con el alma más negra que el carbón.
Y Dios te oirá, que cual al ara santa
el humo se le saca a tenazadas,
le sacarás el humo a bofetadas,
haciéndole de yapa un buen chichón.

Viviendo un cholo aquí, nunca habrá calma,
aunque castigues cada intriga nueva,
dándole el *soplamoco* que lo lleva
hacia el Perú, sacándole el añil;
sólo conseguirás que del camino
se lleve los zorzales y la oveja,
porque al huir ninguna cosa deja
que no sean catinga y trampas mil.⁴⁹

Los Críticos Años Veinte

En 1920 la situación continuó siendo compleja. Luego de un nuevo intento de acuerdo entre Chile y Bolivia para cederle un corredor por la zona de Arica o la eventual venta del puerto a Bolivia, Perú presionó a Bolivia con el rompimiento de las relaciones diplomáticas. En La Paz hubo manifestaciones antiperuanas. Un golpe de Estado en Bolivia, considerado “pro peruano”, desahució las negociaciones chileno-bolivianas produciendo, de paso, la movilización de tropas chilenas y peruanas a la frontera, lo que en Santiago se conoció como la “Guerra de Don Ladislao”, en alusión al Ministro de Guerra chileno Ladislao Errázuriz.

Seguidamente, las cancillerías del Perú y Bolivia aprovecharon la apertura de las labores de la Liga de las Naciones en Ginebra, para presentar sendas notas, pidiendo que la Asamblea procediera a conocer –no revisar- los tratados de 1883 y de 1904, firmados por dichas naciones con Chile. Las peticiones expresaron que, atendidos los repetidos incumplimientos por parte de Chile de las estipulaciones de ambos convenios, procedía declararlos inaplicables, pues constituían una “amenaza para la paz”.

⁴⁹ *El Corvo*, Iquique, N° 2, 21/1/1919, p. 1. Este diario tenía la siguiente provocadora leyenda como subtítulo: “Este periódico humorístico sale cuando puede. Fundado para combatir la gripe peruana.”

El Perú alegaba por el plebiscito de Arica y Tacna que no había podido ser ejecutado, debido, según rezaba su presentación, a la “enorme resistencia de Chile (...) Chile oponía siempre condiciones acerca del Tratado: la compra de las provincias, que el Perú siempre ha rechazado; la división del territorio en diversas zonas que serían distribuidas a los dos países por nuevos Tratados sin consultar al pueblo”. Sin embargo, a fin de 1920, la delegación peruana retiró su reclamo.

Por su parte, Bolivia se quejaba de la imposición del Tratado de 1904. Aunque no pedía una revisión inmediata del documento, sí deseaba que la Liga de las Naciones “se asegurase, por medio de una investigación profunda, si la situación justificaba una invitación a los dos Estados para proceder a un nuevo examen del Tratado por las razones indicadas en el Pacto mismo”.⁵⁰

La Asamblea nombró una comisión de tres juristas, que, luego de algunos meses, declaró inadmisibile la demanda de Bolivia, pues la Asamblea no podía modificar por sí misma ningún Tratado; la modificación de los tratados era de la sola competencia de los Estados contratantes.

La situación continuó agravándose en 1921 cuando el Presidente peruano Augusto B. Leguía -como plataforma de su política nacionalista- exigió la devolución de las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá y proclamó la inaplicabilidad del plebiscito.⁵¹ En 1922, al fracasar las negociaciones directas Salomón-Barros Jarpa, Estados Unidos comenzó a actuar como árbitro entre ambos países. La discusión se centró en el futuro de Tacna y Arica; en ese momento el plebiscito no aparecía como la solución más factible debido a la gran tensión que se vivía en la zona. Tras años de negociaciones en Arica, Washington llegó al convencimiento de que la votación era impracticable.

Perú alegaba que solamente la población originaria, o sea peruana, tenía derecho a voto, y Chile planteaba que podían votar todos los ciudadanos residentes desde hacía seis meses, no importando su nacionalidad. Además, el Perú rechazaba la posibilidad de que Chile administrara el desarrollo de la consulta.

En 1925, por petición expresa de ambos países, el Presidente de Estados Unidos designó una comisión plebiscitaria, encabezada por el general John Pershing en calidad de árbitro.⁵²

⁵⁰ Mario Barros Van Buren, *Chile en la Sociedad de las Naciones (El debate con Perú y Bolivia)*, Instituto de Chile, Santiago, 1998.

⁵¹ Julio Cotler, *Clases, Estado y Nación en el Perú*, Lima, 1978, p. 199.

⁵² El gobierno chileno consideró poco imparcial a Pershing, quien aceptó en repetidas oportunidades las reclamaciones de la parte peruana respecto de arbitrariedades y actos

Entre 1925 y 1928, producto del fracasado trámite plebiscitario, la frontera con el Perú fue cerrada, produciendo un grave daño a la economía regional.

En 1926, ante la imposibilidad práctica de llevar a cabo el plebiscito, el secretario de Estado estadounidense Frank Kellogg propuso que las dos provincias en litigio (Tacna y Arica) fueran entregadas a Bolivia, bajo perpetua desmilitarización y una eventual tutela estadounidense. Al parecer, Kellogg estaba convencido de que buena parte de la clase política chilena se inclinaba en solucionar el problema de la mediterraneidad boliviana mediante sesión de una parte de los territorios en disputa a Bolivia –el puerto de Arica- vía venta o canje territorial (además de eliminar, por añadidura, la vecindad territorial con el Perú) y que el gobierno peruano estaba dispuesto a ceder un territorio al sur de Arica a Bolivia. Eventualmente, Washington confiaba en tener acceso al uso de Arica en caso de guerra. El gobierno peruano rechazó de plano esa posibilidad, habida cuenta que una buena parte de la población local era peruana.

Finalmente, en 1929 ambos países dilucidaron directamente sus diferencias quedándose con una ciudad cada uno. Paradójicamente, la diplomacia estadounidense había propuesto en 1882, antes del fin de la guerra, que ambos países se dividieran equitativamente las dos ciudades.

Las Cancillerías peruana y chilena negociaron en secreto gran parte del tratado para evitar la injerencia estadounidense que, según la opinión chilena, tendía a privilegiar la posición del Perú y de Bolivia, respectivamente. Al parecer, la cláusula -conocida luego como *candado*-, según la cual el Perú debe ser consultado para la cesión de sus ex territorios a un tercer país, fue puesto en un protocolo complementario, con el propósito de no indisponer a Estados Unidos y su Presidente, Herbert Hoover, con Bolivia. Washington se había comprometido a apoyar la demanda marítima boliviana, aunque su primera prioridad era solucionar el problema de Tacna y Arica. Como Estados Unidos aparecía patrocinando el tratado, no podía suscribir a la vez un *candado* contra Bolivia. Obviamente, la posición boliviana fue de abierto rechazo al protocolo.⁵³

Según un autor chileno, el Presidente Leguía habría insistido en la suscripción de un protocolo adicional al Tratado de 1929. El mandatario peruano habría sostenido

de violencia de las autoridades y residentes chilenos en la zona. En Arturo Alessandri Palma, *Recuerdos de gobierno*, Santiago, 1967, vol. I, pp. 156-161.

⁵³ Para un ex Canciller boliviano, “a partir de ese acuerdo la negativa para que Bolivia pudiera recuperar un acceso soberano al Pacífico no era responsabilidad exclusiva de Chile. Generaba un elemento de fricción sin tener que ceder nada”. En Javier Murillo de la Rocha, *op. cit.*, p. 126.

la tesis de que una solución para Bolivia no podía realizarse sobre la base de que Chile y el Perú perdieron su calidad de vecinos territoriales.⁵⁴

En cambio, el ex Canciller peruano Allan Wagner sostiene que “está suficientemente documentado, incluso por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Conrado Ríos Gallardo, que la mencionada cláusula del protocolo complementario fue incluida a propuesta de Chile y, aunque el Presidente Leguía no veía razón para ella, no objetó su incorporación (...) Ese mismo año surgió en Bolivia el dicho de que «un país tiene la *llave* y el otro el *candado*»”.⁵⁵

Por su parte, William Culbertson, el Ministro estadounidense en Santiago de la época, escribió en sus memorias que la cláusula del protocolo fue probablemente redactada por el diplomático chileno Félix Nieto del Río, quien habría tomado la idea del artículo sexto del tratado chileno-boliviano de 1866 que disponía la dependencia de ambos signatarios para la transferencia del territorio a una tercera potencia. Añadía que “Chile fundamentó utilizar nuevamente esta cláusula, como una respuesta a la amenaza de un tramo ferroviario de Tacna a La Paz, que creía que el Perú construiría en detrimento del dominio e intereses chilenos en Bolivia.

El enviado americano menciona también en sus memorias que aconsejó a Chile, en principio, eliminar la cláusula una vez que se definió que no se habilitaría un puerto para Tacna al norte de Arica. Según Culbertson, la cláusula quedó por insistencia de Ríos Gallardo, conocido por su actitud antiboliviana. Por otra parte, Culbertson justificó la cláusula del protocolo, en su forma final, como positiva ya que obligaba a Chile y Perú a ponerse de acuerdo, en forma conjunta, para resolver la cuestión boliviana, evitando así el juego tradicional que estos países habían tenido anteriormente para usar a Bolivia en contra de uno de ellos”.⁵⁶

Es interesante consignar que el Perú no dudó en utilizar dicho *candado* para oponerse al eventual acuerdo entre Bolivia y Chile para eliminar el problema del enclaustramiento marítimo. Esto ocurrió al menos en 1950 y 1975, durante los gobiernos de Gabriel González Videla y el general Augusto Pinochet,

⁵⁴ Guillermo Lagos Carmona, *Historia de las fronteras de Chile. Los tratados de límites con Perú*, Santiago, 1981, segunda edición, p.92 y sigs.

⁵⁵ Allan Wagner Tizón, *Las Relaciones del Perú con Chile y Bolivia después del Tratado de 1929: Hacia una Cooperación Trinacional*, Lima, Agosto de 1999. (Exposición presentada en el lanzamiento del libro “La Política Exterior del Perú”, de Ronald Bruce St. John). Es sintomático que en el libro que Ríos Gallardo escribiera sobre esta materia, no aparezca ni una sola línea sobre el famoso *candado* para Bolivia. Véase Conrado Ríos Gallardo, *Chile y Perú. Los pactos de 1929*, Santiago, 1959.

⁵⁶ Jorge Gumucio Granier, *op. cit.* Este autor cita a W. Culbertson: *Book on Chile*, Manuscript Division Library of Congress. pp. 91-101.

respectivamente. En el primer caso, dicha oposición tenía como objeto evitar que se materializara la propuesta compensación boliviana para que Chile, a cambio de un corredor de diez kilómetros de ancho entre la frontera peruana y la ciudad de Arica, tuviera acceso al usufructo de las aguas del lago Titicaca. Más aún, en 1955 Perú logró suscribir con Bolivia un acuerdo que ponía a su vez otro *candado* al uso de las aguas del lago binacional.⁵⁷

Demostrativo de la difícil vecindad de nuestros tres países es el hecho de que recién en 1987 fueron intercambiados los instrumentos de verificación para poner en práctica el acuerdo de 1955. Uno de ellos implicaba la construcción de la carretera Ilo-Desaguadero-La Paz, que aún espera ser completada.

En los años setenta se produjo quizás la mayor tensión entre Chile y el Perú después de la posguerra. Los aprestos bélicos del régimen militar peruano encabezado por los generales Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, respectivamente, supusieron un serio desafío para Chile. Hasta hoy no hay claridad respecto a las reales intenciones peruanas. Entre las autoridades chilenas de la época existía el convencimiento de que las Fuerzas Armadas peruanas, aprovechando la debilidad relativa de Chile luego del golpe militar de 1973, estaban dispuestas a recuperar los territorios perdidos durante la guerra.

En todo caso, hay suficientes antecedentes que ponen en duda la tesis según la cual hubo dos fases diametralmente opuestas en el gobierno militar peruano respecto de Chile, sustentada por José Rodríguez Elizondo en su reciente libro. Este autor sostiene que Morales Bermúdez evitó un conflicto armado, “ganándose la inquina de los nacionalistas decepcionados porque no se dejó involucrar en una guerra con Chile”. Asegura que en dos oportunidades (1977 en Lima y 1979 en Buenos Aires) se reunió con el general Jorge Rafael Videla rechazando una alianza militar contra Chile.⁵⁸

Sin embargo, el conocido analista estratégico peruano Andrés Gómez de la Torre rebate esta teoría y, por añadidura, pone en duda la imparcialidad de Rodríguez, debido a su antigua amistad con el ex general Edgardo Mercado Jarrín. Sostiene que la política exterior de Morales Bermúdez frente a Chile fue más inteligente que la de Velasco, pero no por ello menos agresiva. Un ejemplo de su mayor refinamiento fue el hecho de que los Cancilleres del gobierno de la “segunda fase” eran diplomáticos de carrera (los embajadores Carlos García Bedoya, Arturo García y García y José de la Puente y Rabdill).

⁵⁷ Allan Wagner Tizón, *op. cit.*

⁵⁸ José Rodríguez Elizondo, *Chile-Perú: El siglo que vivimos en peligro*, Santiago, 2004, p. 130.

Si bien no fue aparentemente tan nacionalista ni confrontacional como Velasco en su relación a Chile, Morales Bermúdez rechazó a la Marina peruana y aseguró el acercamiento con Argentina.⁵⁹

El Canciller argentino Almirante Guzzetti propuso en 1977 una alianza estratégica previa a la crisis de 1978 entre Chile y Argentina. Tampoco se puede pasar por alto que Videla era muy amigo de Morales Bermúdez, a diferencia de Velasco que no tuvo una relación tan estrecha con Perón y su mujer. Videla visitó Lima en 1977 y el intercambio castrense fue muy intenso entre las Fuerzas Armadas argentinas y peruanas, especialmente entre 1976 y 1980. Esto se evidenció, por ejemplo, en el apoyo peruano a la aventura argentina en Malvinas. Además, el Perú compró miles de fusiles FAL argentinos, entre otros pertrechos. Esta estrategia fue una suerte de “equilibrio de poderes”, a diferencia de 1975 en que el Perú sólo confiaba en una alianza con Bolivia durante esa crisis.

Una evidencia irrefutable del talante agresivo de Morales Bermúdez es que haya continuado con renovados bríos las compras de armas iniciadas por su antecesor. Mientras Velasco compró en la URSS cerca de 500 tanques y otros cuantiosos equipos para el Ejército, Morales Bermúdez adquirió un total de 52 cazabombarderos Sukhoi 22 y 22M (36 unidades en 1976 y 16 en 1980; la adquisición más grande de un modelo de avión de combate hecha en el Perú), bombarderos Canberra y misiles antiaéreos para la Fuerza Aérea, y submarinos y corbetas misileras para la Marina, además de potenciar la aviación naval. A ello se suma el hecho de que en 1979 ordenó realizar las más grandes maniobras militares conjuntas hechas en territorio peruano, azuzando con ello el sentimiento antichileno como factor de unidad nacional.⁶⁰

En cambio, en otras ocasiones, más escasas por cierto, ha habido espíritu de cooperación y entendimiento entre los antiguos adversarios. Es el caso del acuerdo de las doscientas millas marítimas de soberanía sobre la zona económica exclusiva que en 1952 suscribieron Chile, Perú y Ecuador.

Otro momento de distensión, pese a que Chile era gobernado por los militares, ocurrió en 1987, cuando el Presidente Alan García señaló que el Perú no sería obstáculo al acuerdo que pudieran alcanzar Bolivia y Chile, y que, en caso de que éste involucrara territorios que habían sido del Perú, la intervención del gobierno

⁵⁹ Colocó al mando de la Marina de Guerra del Perú al almirante Jorge Parodi Galiani, enemigo de los marinos “revolucionarios” almirantes Guillermo Faura Gaig y José Arce Larco, comandantes generales en el período de Velasco.

⁶⁰ Entrevista del autor con Andrés Gómez de la Torre Rotta, Lima, julio de 2004. Gómez de la Torre ha sido el primer jefe civil de inteligencia exterior peruana del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) durante el gobierno del Presidente Toledo. Actualmente es asesor de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso del Perú.

peruano, en virtud de la consulta que le sería formulada por Chile, estaría solamente dirigida a cautelar los derechos y servidumbres en beneficio del Perú consagrados en el Tratado de 1929.

“Esta declaración del Presidente García puso claridad donde, hasta entonces, había existido ambigüedad y prejuicio. Ya no existirían ni *llave ni candado* y las relaciones del Perú, tanto con Bolivia como con Chile, podrían desenvolverse sin esa *hipoteca*, como la llamó el Embajador Carlos García Bedoya, a fin de desarrollar todo su potencial no sólo en términos bilaterales sino a través del enfoque de desarrollo conjunto de los tres países, en especial de sus zonas colindantes, que había inspirado la propuesta peruana de 1975”.⁶¹

En ese período también se planteó una iniciativa en materia de limitación de gastos militares –retomada años más tarde por los Presidentes Ricardo Lagos y Alejandro Toledo-, se hicieron esfuerzos para destrabar los temas pendientes del Tratado de 1929 y se estableció la primera medida de confianza mutua entre ambos países, consistente en un mecanismo permanente de diálogo entre los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas de Chile y el Perú, que ha operado exitosamente con reuniones anuales desde 1985 hasta el día de hoy.

En el caso de la relación con Bolivia, hay que consignar que la constante durante todo el siglo XX fue la fragilidad, caracterizada por períodos álgidos seguidos de momentos de mayor normalidad. Por ejemplo, durante la Guerra del Chaco (1932-37), Chile no permitió que Bolivia importara material bélico para su defensa, lo que los bolivianos consideraron un acto inamistoso. Recién en 1937, ambos países perfeccionaron el tratado para evitar una repetición.

En cambio, el gobierno revolucionario del MNR, encabezado por el Presidente Víctor Paz Estenssoro se acercó notablemente hacia Chile. Incluso, en 1955 se suscribió un tratado de complementación económica que posibilitó la construcción de un oleoducto binacional. El mismo año, Paz visitó Arica y Carlos Ibáñez estuvo en La Paz.

Sin embargo, pocos años después surgió el conflicto por las aguas del río Lauca, lo que dio pie a que en 1962 La Paz rompiera las relaciones diplomáticas con Santiago. Este ambiente permaneció inalterado durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva, pese a negociaciones reservadas que no fructificaron. Incluso hubo efímeros contactos entre Salvador Allende y el general Juan José Torres hasta su derrocamiento en 1971.

⁶¹ Allan Wagner Tizón, *op. cit.*

Más tarde, los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer trataron de solucionar el problema de la mediterraneidad con los acuerdos de Charaña, conversaciones que fracasaron a poco andar. Las relaciones diplomáticas, restablecidas en 1975, fueron interrumpidas nuevamente por La Paz en 1978, quedando reducidas a meras relaciones consulares hasta el día de hoy.⁶²

Según Luis Maira, el intento de acuerdo de Pinochet y Banzer se habría producido por la cercanía ideológica anticomunista de ambos regímenes y el temor por la proximidad del centenario de la Guerra del Pacífico, “que podía constituirse en una tentación para los tres países vecinos que tenían cuentas pendientes o asuntos que saldar”.⁶³ Sin embargo, parece tener más sentido el papel que jugó la urgencia del régimen militar chileno por ganar tiempo ante un eventual ataque militar peruano que una supuesta simpatía ideológica con la dictadura boliviana que no se tradujo, por cierto, en ningún tipo de cooperación en la represión del comunismo interno.

En todo caso, es importante retener el hecho de que, pese a la complejidad de la relación bilateral, Chile demostró persistentemente una disposición pragmática a solucionar la mediterraneidad boliviana, principal disputa entre ambos países, ya sea mediante la cesión de un corredor⁶⁴, el canje territorial, el desvío de aguas y, más recientemente, con el expediente de la exportación de gas natural. En al menos seis ocasiones, Chile hizo esfuerzos serios pero infructuosos para solucionar el problema del enclaustramiento de Bolivia.

Negociaciones para Solucionar la Mediterraneidad Boliviana, 1895-2003

Año	Propuesta Chilena
1895	Cesión de Arica y Tacna o de un puerto al sur de Arica
1920	Cesión de corredor por Arica o venta de puerto
1950	Cesión de corredor al norte de Arica por aguas del lago Titicaca
1975	Cesión de corredor al norte de Arica por canje territorial
1987	Cesión de corredor al norte de Arica por aguas para irrigar el norte chileno
2000-2003	Cesión de enclave costero, sin soberanía, para exportar gas

⁶² Carlos Bustos, *op. cit.*, pp. 153-203.

⁶³ Luis Maira, *op. cit.*, p. 56.

⁶⁴ “No cabe dudas del pragmatismo o realismo chileno en su manejo de las relaciones bilaterales (...) [Queda demostrado] aunque fuera sólo una estrategia geopolítica para consolidar la soberanía de la rica provincia de Tarapacá, que [a principios de siglo] Chile aceptaba un corredor para Bolivia en algún lugar al norte de la quebrada de Camarones”. En Sergio González Miranda, “La tercería boliviana...”, *op. cit.*, p. 26.

En algunos casos, el intento no pasó de unas tímidas conversaciones reservadas entre los diplomáticos (1920 y 1987); en otras, por el contrario, ambos países iniciaron negociaciones formales (1895 y 1975). Por diversos motivos –veto peruano, rechazo de la población boliviana, exigencias exageradas de ambas partes, etc.-, ninguno de dichos acercamientos tuvo resultados positivos.

II.- Situación Presente de la Relación Vecinal

Hoy en día, Chile y sus vecinos del norte tienen gobiernos democráticos. Desde la renuncia del Presidente Alberto Fujimori en el Perú y el advenimiento de gobernantes civiles en Bolivia, era razonable pensar que se abría una nueva etapa de mayor concordia y entendimiento entre Chile y su entorno vecinal, especialmente por la cercanía ideológica de sus gobiernos. En principio, están dadas las condiciones para una relación política y económica fluida y sin inconvenientes. Sin embargo, éste no ha sido el caso hasta ahora.

El actual devenir de la relación, especialmente en cuestiones de seguridad y defensa, ha estado influenciada en gran medida por una historia reciente jalonada de episodios singularmente dramáticos y sangrientos. Un somero resumen de la historia política y militar de los últimos treinta años en los países en estudio demuestra este aserto. Estos acontecimientos contribuyeron a cristalizar una historia caracterizada por la desconfianza y los aprestos bélicos.

En las últimas tres décadas, esta subregión ha sido regida por las Fuerzas Armadas. Recién finalizaron los gobiernos militares en 1980 en el Perú –en un sentido más amplio, la influencia castrense recién llegó a su fin en el 2000-, en 1982 en Bolivia y en 1990 en Chile. Producto de lo primero, se violaron sistemáticamente los derechos humanos, con un saldo de miles de desaparecidos en los tres países.

Precisamente durante el dominio de los regímenes castrenses se produjeron crisis internacionales e incluso guerras externas. Chile vivió crisis prebélicas con dos de sus vecinos, y el Perú tuvo escaramuzas bélicas con el Ecuador en 1981, durante el gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry, y una guerra fronteriza en 1995, bajo la égida de Fujimori. Estos aprestos militares implicaron también la adquisición de cuantiosas cantidades de armas, como se ha esbozado más arriba.

A los conflictos externos se sumaron verdaderas guerras internas con un saldo de miles de muertos entre combatientes y población civil. En el Perú el Estado combatió a sangre y fuego a Sendero Luminoso y el MRTA –en el reciente informe de la Comisión de la Verdad peruana se habla de 70.000 víctimas entre muertos y desaparecidos-; además hubo brotes iniciales de guerrilla urbana en Bolivia y Chile.

Como efecto colateral de los gobiernos militares y la represión interna se produjeron otros fenómenos igualmente dañinos para la institucionalidad de los países: la *policialización* de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno contra manifestantes y delincuentes; la extendida corrupción de los militares involucrados en la lucha antinarcóticos, y el consiguiente desprestigio de las Fuerzas Armadas, con la sola excepción de Chile.

Un caso paradigmático fue la acción corruptora de Vladimiro Montesinos, un oscuro ex capitán de ejército acusado de traición a la patria. En 1992, gracias al autogolpe de Fujimori y la cúpula castrense⁶⁵, se intronizó Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional que corrompió a los altos mandos de las Fuerzas Armadas –promovió al generalato a gran parte de su promoción- y del aparato civil. Desde entonces, y por espacio de diez años, el SIN fue fuente de tráfico de influencias, coimas de diversa índole, chantaje contra jueces, etc.

Las Fuerzas Armadas del Perú y Bolivia salieron especialmente debilitadas después de su intervención en política. En Bolivia incluso se habla de la eventual eliminación de las Fuerzas Armadas por carecer de estatura estratégica.⁶⁶ En el Perú hay un gran número de oficiales de alta graduación presos y la capacidad militar de sus Fuerzas Armadas está diezmada por falta de repuestos y disminución de presupuestos.⁶⁷

Luego de los gobiernos militares o de gobiernos con fuerte influencia castrense, como fue el caso del régimen que encabezó Fujimori, las transiciones a la democracia se han desarrollado con enormes dificultades, producto del

⁶⁵ Las Fuerzas Armadas, que habían preparado un golpe de Estado contra Alan García, aplicaron durante el gobierno de Fujimori la estrategia antisubversiva que habían venido reclamando, sin ser escuchadas por los gobiernos civiles anteriores. Fernando Rospigliosi, *Montesinos y las Fuerzas Armadas. Cómo controló durante una década las instituciones militares*, Lima, 2001, p. 143.

⁶⁶ En un seminario sobre militares y política en la región andina, efectuado en Lima en agosto de 2001, René Antonio Mayorga, politólogo de vasta trayectoria en su país, habló seriamente, desde un punto de vista académico, de la posibilidad de que Bolivia pueda prescindir de sus Fuerzas Armadas, afirmando de paso que no son pocos los que piensan igual que él.

⁶⁷ Purgan penas de cárcel, acusados por corrupción o violación de derechos humanos, entre otros, los comandantes generales de Marina, Fuerza Aérea y Ejército, almirantes Américo Ibárcena y Alfredo Arnaiz; Elesván Bello; Nicolás Hermoza Ríos y José Villanueva Ruesta, respectivamente; los jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército, generales Juan Yanqui y Juan Rivera Lazo; el jefe del SIN (1992-98), general Julio Salazar Monroe y el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, general Jorge Malpartida; el ex ministro de Defensa, general César Saucedo Sánchez y ex jefe de la III Región Militar, Abraham Cano Angulo.

descontento social, una débil institucionalidad, la falta de crecimiento económico y la permanencia de pleitos fronterizos.

Un tema especialmente sensible es la reforma y modernización de las Fuerzas Armadas. En el caso peruano, este proceso se lleva a cabo a cuentagotas, a veces con fuertes retrocesos. En parte se debe a la falta de voluntad política de los gobiernos, al nombramiento de militares como ministros de Defensa, incluyendo a personajes fuertemente vinculados con el régimen fujimorista. Además, el servicio militar voluntario ha sido un completo fracaso, en parte porque siguen los maltratos al interior del Ejército.

Recientemente, Enrique Obando y Alberto Otárola, director de Política Estratégica y viceministro, respectivamente, ambos civiles, renunciaron al Ministerio de Defensa enfrentados con el ministro uniformado. Obando considera que “el problema es que quien está manejando la supuesta reforma piensa de esa manera: que los militares están por encima de los civiles”.⁶⁸ Confirmando este aserto, Roberto Chiabra, Ministro de Defensa y comandante general del Ejército peruano hasta fines de 2003, “precisó que se requiere un militar en la conducción del ministerio y no un civil porque «se desconoce cómo funcionan los institutos armados y no se podría negociar con los comandantes generales, pues lo pasarían»”.⁶⁹

En el caso boliviano, el rasgo más negativo de la situación de las Fuerzas Armadas es que no existe una política de Defensa en el país. Desde la recuperación de la democracia, los políticos han aprendido a convivir con militares con baja autoestima, entregándoles determinadas prebendas para ganar su confianza temporal (cooptación). Sin embargo, la clase política ha abdicado de conducir a las Fuerzas Armadas. Esto lo sienten las Fuerzas Armadas, las que consideran que han sido abandonadas por los gobernantes.

Esto se expresa en la reducción sistemática del presupuesto militar, la jibarización de las Fuerzas Armadas (privatización de algunas empresas en poder de los militares) y el rezago profesional de todo orden (material -desde el retorno a la democracia no se han hecho adquisiciones de armas de alguna consideración-, tecnológico, educativo y organizativo).

Una encuesta interna de las Fuerzas Armadas, realizada en 1999, demostró el abandono masivo de las filas, debido a los bajísimos salarios y las pocas perspectivas profesionales, el deterioro de la calidad de vida de los funcionarios y la baja del

⁶⁸ “Chiabra no permite que la reforma de las Fuerzas Armadas se concrete”, *El Comercio*, Lima, 12/7/2004.

⁶⁹ *En la Mira. Boletín de Seguridad y Defensa*, Instituto de Defensa Legal (IDL), N° 16, Lima, Julio 2004, p. 3.

prestigio social de la profesión. Esto se evidencia, por ejemplo, en una disminución dramática en las postulaciones a las escuelas matrices y en el prestigio y convocatoria del servicio militar obligatorio.⁷⁰

Actualmente, Bolivia se encuentra sumida en una peligrosa involución político-social. Luego de la recuperación de la democracia en 1982 el país vivió quizás el período institucional más largo en su vida republicana, sin golpes militares y con la normal sucesión de ocho presidentes constitucionales.

Este hecho sorprendente fue producto de un amplio consenso político y la racionalidad y sensatez de una serie de pactos entre los partidos políticos para hacer gobernable el país. El propio general Banzer, caudillo militar en años pasados y mandatario constitucional hasta agosto de 2001, jugó un papel fundamental en dicha normalización al renunciar al uso de la fuerza como ocurría con anterioridad.

Sin embargo, a partir del año 2000 se evidenciaron signos de agotamiento de un sistema político excluyente y un modelo económico liberal que no ha satisfecho las expectativas de la población.

Luego de la muerte de Banzer, en medio de una caótica situación de paros y enfrentamientos entre policías y campesinos, se han sucedido gobiernos débiles que terminaron con la renuncia anticipada de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y su reemplazo por el Vicepresidente Carlos Mesa, sin apoyo explícito de ningún partido político.

Muy por el contrario, el desarrollo político, económico y social de Chile ha sido de creciente estabilidad y prosperidad. Luego de una transición especialmente compleja por la presencia de Pinochet a la cabeza del Ejército hasta 1998 y la existencia de amarres constitucionales antidemocráticos, la normalización de la relación civil-militar se ha acelerado durante el gobierno del Presidente Lagos. No es una mera casualidad que Michelle Bachelet, además de mujer, haya sido la primera Ministra de Defensa socialista desde 1973.

Asimismo, las Fuerzas Armadas chilenas están involucradas en una modernización institucional sin precedentes, sólo comparable a la efectuada a fines del siglo XIX, con asistencia de una misión militar prusiana, que significó la profesionalización de la carrera militar.⁷¹

⁷⁰ Ministerio de Defensa Nacional de Bolivia, Unidad de Análisis de Políticas de Defensa (UDAPDE), *Las Fuerzas Armadas hoy: Realidad, expectativas y perspectivas institucionales. Informe de la encuesta*, La Paz, 1999, p. 3.

⁷¹ Carlos Maldonado Prieto, "Segunda Profesionalización Militar de Chile", IUS-Canada 2004 International Conference: *Transformation and Convergence: Armed Forces and Society in the New Security Environment*, Toronto, 1-3/10/2004.

Incremento de Tensiones Vecinales

Después del retorno a la democracia, Chile logró normalizar sus relaciones con Argentina, con la que se enfrentó en un serio conflicto limítrofe en 1978 y que llevó a ambos países al borde la guerra, al punto de establecer una alianza estratégica sin precedentes. Este proceso se inició en 1984 con la suscripción del tratado de paz y amistad, pero adquirió una nueva cualidad con el advenimiento de gobiernos civiles en ambos países. Desde entonces se solucionaron casi todos los conflictos de demarcación fronteriza, se suscribieron tratados contra la proliferación química y biológica y de complementación económica, se estableció una metodología para homologar los gastos de defensa y, prácticamente, se han levantado las hipótesis de conflicto mutuas.⁷²

Chile ha intentado la misma estrategia hacia sus vecinos del norte. Sin embargo, los resultados han sido mucho más pobres. Por ejemplo, se ha establecido el mecanismo de las reuniones 2+2 (Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores) con el Perú. Hasta la fecha ha habido solamente una reunión. Producto de la tensión entre ambos países se han postergado indefinidamente nuevos encuentros.

En todo caso, es preciso señalar que la única cumbre 2+2, efectuada en 2001, dio excelentes resultados. En virtud de dicho encuentro se estableció un Comité de Seguridad y Defensa (COSEDE) y la puesta en marcha del proceso de estandarización del sistema de medición de los gastos de defensa. Igualmente, los Ministros acordaron la erradicación de las minas antipersonal, como resultado del cual se realizaron eventos simultáneos de destrucción de minas antipersonal en Pucusana, Perú, y en Calama, Chile, en septiembre de 2001.

Asimismo, se convino en la realización de operaciones navales combinadas⁷³, así como el incremento del intercambio de personal militar y docente entre institutos y centros académicos de perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas de ambos países.

Desde entonces, el COSEDE se ha reunido solamente en tres ocasiones, decayendo rápidamente a una instancia formal que no ha contribuido a la distensión en temas de seguridad.

⁷² Esta nueva situación todavía no se traduce en una disminución de los dispositivos militares de ambos países. Por ejemplo, la Región Militar Austral chilena mantiene sus capacidades inalterables (despliegue de tropas, flotas aérea y naval, etc.).

⁷³ En 2004, frente a las costas de Ilo se llevó a cabo el ejercicio combinado de combate a la contaminación "Neptuno 2004". Éste se suma a la reunión semestral entre la Gobernación Marítima de Arica y la Capitanía de Puerto de Ilo. En www.elmostrador.cl, Santiago, 8/11/2004.

Pese a los esfuerzos políticos y diplomáticos por normalizar los vínculos, lo que se observa es un incremento de la tensión con Chile, lo que se evidencia en el aumento de reivindicaciones y reclamos de diverso tipo (público y privado, político, económico, comercial, diplomático y militar). Muchos de ellos son circunstanciales, otros son de larga data. En todo caso, todos han contribuido de una u otra forma a elevar la tensión y debilitar las confianzas.

Demandas Peruanas

En el caso del Perú, los desencuentros con Chile han sido muy variados. Van desde el fracaso de las Convenciones de Lima (1994) para solucionar los temas pendientes del Tratado de 1929 y el incidente de la pavimentación de una parte del Chinchorro en Arica en 1996 (gobierno de Fujimori), pasando por el descubrimiento de micrófonos en la embajada chilena en Lima (gobierno provisional de Valentín Paniagua) hasta las desavenencias durante el gobierno de Toledo.

Desde el año 2000 en adelante se han intensificado los desencuentros en el ámbito económico-comercial, expresados, entre otros, en reclamos de la aerolínea peruana Aerocontinente por la supuesta persecución de sus operaciones en Chile; la acusación contra la empresa chilena Lucchetti por incumplimiento de la legislación ambiental peruana y entrega de sobornos a Montesinos y la acusación contra la aerolínea LanChile de prácticas indebidas para apoderarse del mercado aeronáutico peruano.

Lo mismo ocurre a nivel diplomático con la protesta por la acción unilateral chilena en el traslado de una caseta de observación en la frontera; la muerte de un indocumentado peruano a manos de militares chilenos cerca del hito número uno⁷⁴ y el reclamo de revisión del límite marítimo, considerado perjudicial para los intereses peruanos. La Cancillería limeña sostiene que ambos países no han suscrito un tratado específico sobre delimitación marítima, y ha propuesto iniciar negociaciones en un plazo de 60 días, dejando entrever que ante una negativa chilena en ese sentido, recurrirá a la Corte Internacional de La Haya.⁷⁵ En 1986 ya

⁷⁴ Sintomáticamente, el hito uno, junto a la Línea de la Concordia, era el único lugar fronterizo custodiado por personal militar en todo el territorio nacional. En una rápida reacción, el gobierno chileno decidió reemplazar a los marinos por efectivos de Carabineros. Esta acción fue muy bien recibida por la parte peruana, especialmente la Policía Nacional (PNP).

⁷⁵ En ese sentido, Chile tiene una mala experiencia reciente. En 1994, un panel de juristas latinoamericanos falló a favor de Argentina en el diferendo sobre Laguna del Desierto, un territorio austral disputado por años y fuente de varias crisis entre los dos países. En el intertanto, Chile ha aceptado la propuesta peruana de recurrir a La Haya para solucionar el diferendo limítrofe.

había hecho una gestión similar, aunque menos estridente, el Canciller Allan Wagner.

Por último, en el ámbito militar el Perú ha reclamado por las compras de armas sofisticadas por parte de Chile, especialmente los aviones F-16 y las fragatas misileras y la eventual ventaja tecnológica que con ello se estaría logrando⁷⁶, agregándose a lo anterior el intenso y mediático *lobby* castrense peruano para adquirir fragatas italianas tipo *Lupo* para disminuir una eventual superioridad militar chilena.

Más recientemente, nuevos incidentes han seguido complejizando la relación bilateral. Éstos han sido una fotografía satelital de la base aérea de La Joya, cercana a Arequipa, mostrada por dos parlamentarios de la oposición derechista chilena (resultó ser una muestra de propaganda de una empresa israelí distribuida en la feria de armas FIDAE, efectuada en Santiago en marzo de 2004), un ejercicio de guerra realizado por las Fuerzas Armadas chilenas en Iquique, en el que combaten hipotéticamente contra dos adversarios que obviamente son el Perú y Bolivia, y la venta de pertrechos bélicos chilenos a Ecuador en 1994/95, un período coincidente con la llamada Guerra del Cenepa que libraron el Perú y Ecuador.

Demandas Bolivianas

En el caso de Bolivia, las acusaciones contra Chile se intensificaron con la llegada al poder de Banzer en 1997, aunque volvieron a bajar de tenor temporalmente a partir de la asunción del Presidente Lagos, para vivir un resurgimiento dramático desde la llegada al poder de Carlos Mesa.

Las querellas bolivianas se han concentrado en el área económico-comercial mediante la queja por el desequilibrio comercial a favor de Chile y la imposición de cuotas a las importaciones bolivianas de soja, aceites y otros productos; las acusaciones por el supuesto contrabando desde la zona franca de Iquique; la supuesta complicidad chilena por el comercio de precursores químicos para la elaboración de cocaína en Bolivia; la negativa a vender gas natural a Chile, incluso con una expresa prohibición incorporada en un acuerdo bilateral boliviano-argentino; la negativa a construir un gasoducto entre Tarija y el norte de Chile, y la suspensión indefinida y unilateral de la negociación de un tratado de libre

⁷⁶ Esto llevó al ministro de Defensa David Waisman a ofrecer en 2001 el desistimiento peruano a tener en sus arsenales los misiles R-77 de procedencia rusa a cambio de que Chile no comprara los F-16, revelando de paso la existencia de dichos misiles y debilitando la argumentación respecto de la vulnerabilidad estratégica peruana. Más detalles en Instituto Libertad, "Chile y Perú: Una visión desde la seguridad", *Opinión Política*, N° 71, Santiago, 23/11/2001.

comercio que vendría a reemplazar el convenio de complementación económica actualmente vigente.

En el ámbito diplomático, los desencuentros se han focalizado en el reclamo por el uso sin compensación monetaria de las aguas del Silala, considerado un manantial sito en territorio boliviano, y la reactivación de la demanda centenaria por la recuperación del acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Esta reivindicación adquirió mayor preponderancia debido a que en 2004 se cumplieron cien años de la firma del tratado que selló la mediterraneidad boliviana.

Además, con Carlos Mesa en la primera magistratura, la Cancillería paceña ha rediseñado su estrategia. Si hasta entonces Bolivia presionaba a Chile mediante la denuncia ante todo foro o instancia internacional, ahora se suma el lema de “gas por mar”. Esta nueva política supone que las necesidades chilenas por hidrocarburos, especialmente agudas luego de los recortes del gas natural de Argentina, harán más permeables a los gobernantes santiaguinos frente a la demanda boliviana por acceso al mar. En esta línea se inscribe, por ejemplo, la iniciativa boliviana por exportar su gas a través del puerto peruano de Ilo.

El tema de Ilo merece una nota especial, pues refleja bien las maniobras que surgen de una rivalidad ancestral: En 1992, el Perú otorgó a Bolivia un amplio acceso -zona franca y borde costero- en el sureño puerto de Ilo. A cambio, el Perú recibió idénticos derechos en Puerto Suárez, junto al río Paraguay. Demostrativamente, Fujimori y Jaime Paz Zamora se bañaron en la playa de Ilo. Sin embargo, ambas iniciativas no se han materializado en absoluto. Doce años después, en 2004, los Presidentes Toledo y Mesa se reunieron nuevamente allí para suscribir una carta de intenciones para una zona de libre comercio e integración energética, o sea exportación conjunta de gas a México. Toledo y Mesa también se mojaron los pies en la playa. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que dicha alianza tiene pocas expectativas, en gran medida porque Bolivia solamente quiere presionar a Chile y el gas de Camisea (Perú) y el de Tarija (Bolivia) terminarán compitiendo por los mismos clientes.⁷⁷

En 2004, surgió una nueva controversia entre los dos países. Esta vez se trata de un reactivado proyecto gubernamental para perforar pozos en el Parque Nacional Lauca, declarado en 1981 como reserva de la biosfera por la UNESCO. Las aguas captadas allí servirían para irrigar los cultivos de exportación de las provincias de Parinacota y Arica, en la región de Tarapacá. La iniciativa ha merecido fuertes

⁷⁷ Otro ejemplo de la fuerte competencia peruano-boliviana es la “guerra comercial sorda por las oleaginosas bolivianas y otros productos [que] ha tensionado las relaciones entre ambos países”. En Edmundo Pérez Yoma, *Una Misión. Las trampas de la relación chileno-boliviana*, Santiago, 2004, p. 151/152.

críticas tanto de grupos ambientalistas y políticos chilenos como de las autoridades bolivianas.⁷⁸

Por último, en el campo militar Bolivia rechaza de plano la compra chilena de aviones F-16 y tanques *Leopard*, considerándolo un gesto inamistoso, y exige el levantamiento inmediato y sin dilaciones de las miles de minas antipersonal que se sembraron en la frontera común en los años setenta. Ante la lentitud mostrada por Chile, suscriptor de la Convención de Ottawa sobre eliminación de minas, La Paz ha ofrecido, hasta sin éxito, asistencia técnica y búsqueda conjunta de financiamiento internacional para dicho levantamiento.

El ambiente de creciente crispación ha tenido como resultado que muchas de las inversiones chilenas realizadas en Bolivia a partir de la liberación de la economía desde 1985, se han detenido o simplemente han reencausado hacia otros lugares.

La Fallida Negociación del Gas Boliviano

Desde 1975, cuando el “Abrazo de Charaña” dio paso a una posible solución del enclaustramiento territorial boliviano, que los dos países no negociaban tan abiertamente como ocurrió hacia el año 2000, cuando los Presidentes Banzer y Lagos comenzaron a diseñar una operación que auguraba grandes beneficios económicos y políticos.

Este fugaz y a la vez frustrado acercamiento tuvo como base la posibilidad de establecer un enclave en arriendo por 99 años en territorio chileno que antes había pertenecido a Bolivia (Antofagasta), para que el país altiplánico pudiera construir un gasoducto y a través de él exportar gas natural a América del Norte.⁷⁹ Sin embargo, luego que Lagos negociara con cuatro sucesivos presidentes bolivianos, el asunto quedó en nada.

Para Chile, el acuerdo implicaba “básicamente, facilidades para el tendido del gasoducto, condiciones favorables para operarlo desde el punto de vistas técnico y de residencia del personal y concesión al Estado boliviano de una superficie de terreno en el litoral chileno destinada a las instalaciones necesarias para la recepción, procesamiento e industrialización del gas natural”.⁸⁰

⁷⁸ Arnaldo Pérez Guerra, “Ambientalistas e indígenas se oponen a Proyecto Lauca”, www.mediosenlacalle.org/news/2004/12/630.php y “La Cancillería pidió una investigación al Cónsul de Bolivia en Chile: Las perforaciones chilenas en el Lauca afectan a Bolivia”, *La Prensa*, La Paz, 24/8/2004.

⁷⁹ “Puerto para el gas, Bolivia y Chile avanzan con grandes coincidencias”, *La Razón*, La Paz, 3/5/2002 y “El doble discurso de los candidatos bolivianos frente al negocio del gas”, *La Tercera*, Santiago, 26/6/2002.

⁸⁰ Edmundo Pérez Yoma, *op. cit.*, p. 93.

Para Bolivia, en cambio, el acuerdo era parte de una estrategia gradualista, conocida como recuperación de la “cualidad marítima boliviana” para conseguir el acceso soberano al mar, llevada adelante por el Canciller Gustavo Fernández.⁸¹

En junio de 2002 se firmó un protocolo de acuerdo, que incluía la promesa chilena de entregar en concesión al Estado boliviano, por un período de 50 años prorrogables por iguales períodos, una superficie de 600 hectáreas, ampliables eventualmente, para establecer una zona económica especial.⁸²

También se iniciaron conversaciones para suscribir un tratado de libre comercio, un acuerdo minero y otro de conservación y explotación de recursos hídricos.

Sin embargo, como señala un testigo privilegiado de las negociaciones, “los acontecimientos se habían desorbitado en especial desde el momento en que el gobierno del Presidente Quiroga empezó a mirar con abierta simpatía la posibilidad de usar el proyecto del gas como moneda de cambio para conseguir un acceso soberano al mar”.⁸³

Finalmente, las autoridades bolivianas perdieron toda capacidad política para imponer la solución del gasoducto por Chile, en gran medida por las tendencias nacionalistas, incluidas las Fuerzas Armadas, que querían evitar cualquier beneficio económico para Chile, privilegiando una salida por el Perú. Como, a su vez, esta posibilidad es rechazada por las empresas involucradas en el negocio (Repsol de España y su subsidiaria YPF de Argentina, más British Gas y British Petroleum), el proyecto de exportación de gas está prácticamente paralizado.

III.- Perspectivas de la Relación Vecinal

En las páginas precedentes se ha tratado de demostrar que las ya centenarias tensiones diplomáticas que han afectado a nuestros países no se explican por algún tipo de animadversión o cierta coyuntura política producida por la impopularidad pasajera de algún mandatario. Tampoco se explican por la existencia o no de gobiernos democráticos, aunque en las últimas décadas ha quedado

⁸¹ Luis Maira, *op. cit.*, pp. 78-80.

⁸² Edmundo Pérez Yoma, *op. cit.*, p. 94. Otra versión habla de un enclave de mil hectáreas de superficie y quince kilómetros de costa en la segunda región. En Luis Maira, *op. cit.*, p. 75.

⁸³ Edmundo Pérez Yoma, *op. cit.*, p. 112. Como forma de presión sobre Chile, hacia fines de 2001 el gobierno del Presidente Quiroga inició negociaciones paralelas con el Perú. Demostración de ello fueron las visitas del Canciller Diego García Sayán y del Presidente Toledo a La Paz en enero de 2002.

palmariamente demostrado aquella máxima de que las verdaderas democracias no van a la guerra entre sí.

La relación vecinal con Chile está cruzada por paradojas, a veces sin mucha lógica aparente. Por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori, régimen que poseía una muy baja representatividad democrática, las relaciones con Chile fueron en general bastante buenas y estables, situación que se explica en parte por la conjunción de problemas internos (subversión) y externos (tensión con el Ecuador), lo que obligaba al Perú, por razones estratégicas, a mantener una situación desahogada con Chile. A la inversa, Carlos Mesa, un intelectual boliviano moderno y de tendencia socialdemócrata que perfectamente podría ser un símil de la dirigencia de la Concertación chilena, aparece como un serio dolor de cabeza para la Cancillería de Santiago, mucho más complejo que un líder castrense como Banzer, considerado tradicionalmente como más "antichileno".

La verdad es que las tensiones vecinales se explican más que nada por la persistencia de conflictos de larga data, por una guerra internacional mal terminada y una posguerra que, en términos absolutos y a más de ciento veinte años, todavía se niega a morir. Lo que sorprende es la forma en que dichas tensiones han cristalizado y se revitalizan cada cierto tiempo, y la poca voluntad política que ha existido para superarlas.

Luego que en 1999 quedara zanjada definitivamente la concreción de las cláusulas pendientes del Tratado de 1929 y que un año después se produjera el advenimiento de los gobiernos civiles en el Perú, muchos pensaron en Chile que se abriría una era de entendimiento y cooperación bilateral. En un gesto inédito, el Presidente Lagos asistió a la toma de posesión de Alejandro Toledo, y concluyó su visita con una reunión de ambos gabinetes ministeriales en el Palacio Pizarro.

Sin embargo, a poco andar comenzaron los desencuentros. El hecho que marcó el enfriamiento de este efímero acercamiento fue la petición peruana de congelar los gastos militares. Esta solicitud llegó en el preciso momento en que Lagos afinaba los detalles para formalizar la compra de diez cazabombarderos F-16.

Ante la negativa chilena al desarme, surgieron las desafortunadas expresiones del Ministro Waisman, ya reseñadas, y los francotiradores de ambos lados se encargaron de enturbiar definitivamente el ambiente.

Seguramente la falta de diálogo entre los gobiernos y una cuota de prejuicios mutuos hayan complotado para el inicio de un nuevo período de desencuentro. Es probable que el gobierno chileno no haya sopesado adecuadamente la situación política peruana post Fujimori, donde las Fuerzas Armadas aparecían fuertemente cuestionadas por ingentes gastos en armas que, al final, se develaron como

negocios corruptos de la mafia de Montesinos que solamente consiguió adquirir material de desecho de las ex repúblicas soviéticas. Tampoco supo calibrar las consecuencias a nivel de percepciones que produce la imagen que Chile ha estado proyectando en el último tiempo en la región, que es la de un país exitoso y arrogante, cuyos empresarios comienzan a invertir agresivamente en los países del entorno y cuyos militares hacen gala de su preparación profesional y sofisticación tecnológica. Más aún, hay poca conciencia en Chile de que gran parte de la población de los países de la región, incluso sus élites, rechaza el neoliberalismo y la globalización, mientras que, por el contrario, en los ojos de muchos latinoamericanos Chile aparece como el paradigma de esta vía, en una suerte de alianza estratégica con Estados Unidos.⁸⁴

Pero también es muy probable que el gobierno peruano no haya comprendido cabalmente que era impracticable políticamente pedirle a Chile hacer volver a fojas cero todo el programa de renovación de armas de sus Fuerzas Armadas. Seguramente el Presidente Toledo y sus asesores no visualizaron que Lagos ya había hecho un gran esfuerzo por moderar el apetito de los militares chilenos por comprar la mayor cantidad posible de armas de última generación, aprovechando el buen pie económico del país. Es un hecho que ante la firme actitud del gobierno, la Armada chilena redujo sus pretensiones: inicialmente deseaba construir ocho fragatas en el puerto de Talcahuano, y terminó conformándose con la compra de cuatro naves de segunda mano. En el caso de la Fuerza Aérea la situación es similar: las pretensiones iniciales también fueron exageradas. Iban desde la adquisición de aviones F-18, muy superiores a cualquier otra aeronave de combate en la región, hasta la compra de dos escuadrones de F-16. Finalmente, Chile comprará únicamente diez aviones.⁸⁵

En el caso boliviano ocurrió otro tanto. A partir del año 2000, el Presidente Lagos hizo todos los esfuerzos posibles para otorgar una salida ventajosa al gas natural de Tarija, sin vulnerar el sempiterno dogma chileno de negar una salida soberana al mar a Bolivia. Para ello negoció con cuatro presidentes bolivianos. Finalmente, Carlos Mesa desechó cualquier entendimiento, convencido de que la aceptación de un enclave sin soberanía efectiva podría significar su virtual derrocamiento.

⁸⁴ Según uno de los estudios estadísticos más solventes de la región, la población de Chile lidera con un 36% las expectativas de satisfacción con la economía de mercado, a diferencia de la mayoría de los países andinos: Ecuador (12%), Bolivia (11%) y el Perú (5%), ubicado al final de la lista. En Corporación Latinobarómetro, *Informe-Resumen Latinobarómetro 2004. Una década de mediciones*, Santiago, 2004, p. 38.

⁸⁵ Más recientemente ha surgido la posibilidad de que Chile adquiera un número indeterminado de aviones F-16 usados de Holanda o Turquía. Hasta ahora, sin embargo, no hay ninguna confirmación al respecto.

En este episodio también se hicieron seguramente peticiones imposibles de cumplir por ambos actores. Mientras Lagos pedía a sus pares bolivianos que escamotearan el tema de la mediterraneidad, los altiplánicos pugnaban por el cambio de su cualidad territorial, algo que los gobernantes chilenos consideran como inaceptable.

Para cambiar el hasta ahora inexorable curso de los acontecimientos, Chile deberá repensar radicalmente sus relaciones con los vecinos del norte, partiendo por las señales que envía a su entorno.

Es evidente que en Chile no hay una posición monolítica respecto de Bolivia. De hecho, como se ha visto más arriba, al menos en seis oportunidades no se ha respetado el dogma de no discutir el tema de la mediterraneidad. Se reconocen dos líneas en la Cancillería: “La primera postula que el único y gran error que hemos cometido en las relaciones con La Paz es dar señales en distintos momentos respecto de que el problema de la mediterraneidad boliviana puede tener solución. Quienes tienen esta percepción son partidarios de la política de la extrema firmeza, según la cual no podemos ceder un centímetro de terreno...” La otra sostiene “que esta política de discusión cero es insostenible a largo plazo (...) porque la postura legalista de ampararnos o parapetarnos siempre tras el texto de los tratados –por muy legítimos que sean- llevará a Chile ... a perder cada vez más aliados en esta causa en el plano internacional (...) Adicionalmente, hay quienes ven con gran pragmatismo que no es malo tener un colchón entre Chile y Perú, concediendo a Bolivia un corredor al mar con soberanía”.⁸⁶

Un ámbito esencial es la seguridad. Allí deberá definir una actitud estratégica que implique seguir apostando por la disuasión o decidirse por la cooperación. Hasta ahora, cómo negarlo, la disuasión militar ha surtido efecto. No ha habido guerras con los vecinos en más de ciento veinte años. Lo malo es que tampoco ha habido paz, en un sentido amplio del término.

Como señala un experto en el tema, “¿es posible avanzar en la colaboración militar disuadiendo? Afirmo rotundamente que no... La cooperación se manifiesta mediante medidas de confianza mutua, las que deben ser estudiadas y acordadas entre las partes. Estas medidas de confianza mutua, que tienen diferentes niveles de intensidad, se basan en tres consideraciones esenciales, cuales son: sinceridad, confiabilidad y competencia, requisitos que, como podemos apreciar, no aceptan doble lectura... Por otra parte, la disuasión se fundamenta en crear desconfianza y temor al eventual adversario, justamente lo inverso a lo estipulado para la cooperación militar (...) Repito, la disuasión no es compatible con la seguridad cooperativa, en razón de que indefectiblemente desencadenará un proceso

⁸⁶ Edmundo Pérez Yoma, *op. cit.*, pp. 169-170.

armamentista del virtual adversario. En suma, no se puede pretender participar de una seguridad cooperativa con propósitos disuasivos ocultos. Con esta conducta se destruye la colaboración y no se cumple con el primer precepto de las medidas de confianza mutua, cual es la sinceridad".⁸⁷

Esto implica en la práctica que *nuestra* seguridad no puede basarse en la inseguridad de los *otros*, y demuestra los límites de la pura disuasión. Como dice el autor citado, la disuasión es básicamente agresiva, demuestra voluntad de defenderse y atacar si es preciso. Si no está acompañada de cooperación y medidas de confianza, no hay un cambio de calidad en la relación.

Es evidente que faltan más medidas de confianza mutua que destierren los malentendidos y las percepciones de amenaza. Hasta ahora se ha hecho poco y lo poco ha sido lento y hasta con cierto desgano. Hay todavía amplio espacio para cooperar implementando medidas de confianza de una calidad superior, que corresponden a una segunda y tercera generación tanto en el plano militar (medidas de verificación, derechos de sobrevuelo u *open sky*, inspecciones mutuas de tropas, levantamiento de minas antipersonal,⁸⁸ reuniones de altos mandos, visitas institucionales y académicas) como en el involucramiento de la sociedad civil (intercambio de delegaciones escolares, convenios de amistad entre ciudades, comisiones para revisar los textos escolares, etc.).

En el caso particular de Bolivia, habida cuenta de la falta de relaciones diplomáticas, el asunto es más complejo. Por lo mismo es que se deben buscar formas y métodos menos tradicionales para lograr el propósito de disminuir las desconfianzas.

Un problema que se evidencia una y otra vez en la compleja relación trinacional es la falta de conocimiento mutuo. Y esto ocurre a todo nivel de la sociedad, incluso entre los militares y diplomáticos que, por mandato de su profesión, están obligados a conocer a sus vecinos. Hasta ahora ha habido esfuerzos vanos por rescribir una historia común sobre la guerra, en gran medida porque todos los bandos insisten en atrincherarse en sus respectivas "historias oficiales".

⁸⁷ Jaime García Covarrubias, "Bases para una nueva modalidad estratégica", *Fuerzas Armadas y Sociedad*, FLACSO, Año 16, N° 1, Enero-Marzo, Santiago, 2001, p. 38. El autor, brigadier en retiro, fue director de la Academia de Guerra del Ejército de Chile y actualmente es profesor en el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa, en Washington D.C., Estados Unidos.

⁸⁸ En seis años, Chile ha eliminado más de 310.000 minas de los sectores fronterizos con Bolivia, el Perú y Argentina. Todavía quedan poco más de 120.000 minas por levantar. En Phillip Durán, "Balance 2004: Eliminadas 2 mil 700 minas antipersonales", *El Mercurio*, Santiago, 20/1/2005.

Como lo demuestra la experiencia de otros países, es muy probable que habrá una mayor profundización de los vínculos en la medida que se involucre más la sociedad civil de los tres países. Aquí pueden jugar un papel muy activo los periodistas, los universitarios y los propios empresarios en la tarea de superar las percepciones negativas mutuas y los estereotipos de país revanchista versus país expansionista.

En todo caso, el cambio sugerido pasa por una nueva actitud, lo que los alemanes llaman *Aufarbeitung der Geschichte*, o sea el tratamiento crítico de la propia historia. También se le podría designar como sinceramiento. Es algo que ha estado ocurriendo con el proceso de reconciliación en torno a la violación de los derechos humanos en Chile. Es perfectamente posible también hacerlo en sentido vecinal.

No hay dudas de que Chile, luego de ganar la Guerra del Pacífico, no supo administrar la victoria. Como vencedor tampoco ha sabido ser magnánimo. Por el contrario, muchas veces ha tratado, casi inconscientemente, de humillar a sus adversarios. Por ejemplo, nunca se ha pensado seriamente –excepto por motivos coyunturales– en devolver los bienes retenidos de la guerra (libros, el buque *Huáscar*, etc.).⁸⁹

En todo caso, hay promisorios avances. José Miguel Insulza, ex Canciller y actual Ministro del Interior chileno, ha hablado de repensar la historia en forma más crítica: “El día que nosotros nos atrevamos a discutir si después de haber ganado la guerra en Tacna y Arica, con el Ejército peruano retirado hacia su territorio y el Ejército boliviano de vuelta al altiplano, la campaña de Lima era necesaria (...) ¿fue necesario que la guerra continuara por tres años más? Es una pregunta válida y nosotros tenemos que tener un conocimiento un poco más crítico de nuestra historia”.⁹⁰

Mención aparte merece el tema de la mediterraneidad boliviana. Hay que reconocer que si hay un tema de Estado que concita la unidad nacional en Bolivia éste es la demanda por acceso soberano al mar. Durante cien años los bolivianos, independientemente de su origen social, sus convicciones políticas o si se trata de civiles o militares, han sostenido esta reivindicación, y nada indica que no seguirá sucediendo lo mismo en los próximos cien años.

La pregunta que debemos hacernos los chilenos es si estamos dispuestos a soportar una beligerancia boliviana por otros cien años más, con todos los costos materiales

⁸⁹ Es interesante consignar que en algún momento durante las negociaciones para el Tratado de 1929, Chile pensó en devolver el *Huáscar* y otros trofeos, según se desprende de una conversación entre el embajador chileno en Washington, Carlos Dávila, y el secretario de Estado Kellogg. En Jorge Gumucio Granier, *op.cit.*

⁹⁰ José Rodríguez Elizondo, *op. cit.*, p. 325.

(militares, económicos, comerciales) e inmateriales (desprestigio, aislamiento) que esto implica.

Lo obvio es postular una normalización con Bolivia como condición esencial y *sine qua non* para garantizar en el tiempo la seguridad de Chile. Como se ha reseñado anteriormente, Chile y el Perú poseen el *candado* y la *llave* para devolver la cualidad marítima de Bolivia. Hasta ahora, el mecanismo diplomático utilizado ha sido que primero Chile y Bolivia han llegado a un acuerdo, y luego han consultado al Perú sobre su disposición a aceptarlo, presentando un caso de hechos consumados, sin dar posibilidad a que este último pueda ser parte gestora de la solución.

Una segunda alternativa, postulada por el ex cónsul Pérez Yoma, es que “sea Bolivia quien comprometa al gobierno de Lima en una fórmula razonable para los efectos de la cesión de un corredor soberano”.⁹¹

Sin embargo, para conseguir la normalización con Bolivia parece mucho más lógico que Chile asuma la iniciativa y dialogue primeramente con el Perú. Sin la voluntad de las autoridades limeñas nunca habrá una solución razonable. Empero, esto sólo será posible en la medida que ambos países limen sus asperezas, pasen a una nueva fase de entendimiento y se limiten al máximo sus percepciones de amenaza.

En todo caso, Chile deberá mostrar iniciativa, desprendimiento, sentido común y una buena cuota de coraje, desterrando actitudes fatalistas y conformistas, según las cuales “la reticencia de los últimos gobiernos chilenos a abordar de modo inmediato la exigencia boliviana del término de su mediterraneidad, tiene que ver con el hecho simple de que ninguna autoridad puede hacer aquello que su ciudadanía mayoritariamente rechaza”.⁹²

Como está dicho, una genuina reconciliación con los vecinos del norte es fundamental para eliminar las incertidumbres de la seguridad y defensa de Chile, especialmente en un período histórico en que el país sale a “conquistar” el mundo. Idealmente, esta “hipoteca” debería ser superada por esta generación. Chile debe apostar a un vecindario en paz, institucionalizado y próspero económicamente. Eso ayudará a la inserción de Chile en el mundo, abrirá nuevas oportunidades económicas en nuestra región y dará certeza a su situación estratégica.

Chile debería apostar a consolidar la institucionalidad del Perú y Bolivia, en su propio beneficio. Si nada emprende, tampoco podrá quejarse ante la eventualidad

⁹¹ Edmundo Pérez Yoma, *op. cit.*, p. 172.

⁹² Luis Maira, *op. cit.*, p. 92. Haciendo gala de ese fatalismo, Felipe González, por ejemplo, nunca habría enfrentado a la mayoría de los españoles que rechazaban el ingreso de su país a la OTAN.

del surgimiento de regímenes verdaderamente hostiles, oleadas incontrolladas de inmigrantes y otros males similares.⁹³

Mientras las Cancillerías en Santiago, Lima y La Paz discuten sobre una agenda heredada del siglo XIX, los tres países enfrentan temas complejos que han surgido en los últimos años y aún no son enfrentados con decisión.

Uno de dichos desafíos es el tráfico de drogas. Chile colinda con dos de los mayores productores de cocaína del mundo. De hecho, hay cerca de mil kilómetros de frontera común (ochocientos con Bolivia y unos doscientos con el Perú). En alrededor de quince valles se produce cocaína en el Perú. Se trata de zonas geográficas ideales a nivel mundial para estos cultivos. De hecho, se producen varias cosechas al año. Algunas zonas, como Madre de Dios, están relativamente cerca de Chile. Otro tanto ocurre en Bolivia. Del valle del Chapare se está pasando a Los Yungas, más cerca de La Paz y también de Chile.

El ex Ministro del Interior peruano, Fernando Rospigliosi, afirma que probablemente el 80% de la producción de hoja de coca de su país va a la exportación. El resto es consumida, en gran parte, por solamente un millón de personas de origen aymara o quechua. “Pero no hay cifras. Sabemos que hay entre 30 mil y 40 mil hectáreas sembradas, pero no contamos con cifras de cuánto produce cada una ni cuántas plantas tiene. El narcotráfico está usando tecnología moderna. Hugo Cabieses sostiene que en el valle del Apurímac hay 250 mil plantas por hectárea, pero debemos comprobarlo. Lo seguro es que la mayoría de la producción va para el narcotráfico. (...)En los últimos años el narcotráfico ha crecido, no es algo espectacular, pero está ligado a la destrucción de cocales en Colombia. Lo de San Gabán es una muestra de que se requieren insumos de otro lugar, la mayoría es coca nueva. Igual en el Putumayo, ahora se está sembrando coca.”⁹⁴

Más encima, en el futuro cercano, al menos el Perú será un gran productor de heroína. Se sabe que narcotraficantes colombianos están regalando semillas de amapola y entregan nociones para su cultivo en zonas de ceja de selva en el Perú (Cajamarca, por ejemplo).⁹⁵

⁹³ Diversos analistas han llamado la atención sobre el peligro que representan para el sistema político de ambas naciones andinas el movimiento etnocacerista liderado por los hermanos Humala –especialmente por su retórica nacionalista-, Sendero Luminoso, aparentemente en vías de reorganización, y las facciones indigenistas extremas encabezadas por Felipe Quispe, entre otros. Hasta ahora, Chile ha sido inmune a estos fenómenos. Sin embargo, a futuro no se puede descartar algún tipo de influencia.

⁹⁴ Entrevista a Fernando Rospigliosi, en “Los civiles deben decidir cómo se invierte el presupuesto militar”, *El Comercio*, Lima, 1/11/2004.

⁹⁵ Informaciones recientes evidencian el crecimiento de este problema. “Policía destruyó 25 hectáreas de cultivo de amapola en Cajamarca”, *El Comercio*, Lima, 14/3/2005.

La heroína es mucho más adictiva y produce estragos extraordinariamente mayores que la cocaína. También las ganancias para el narcotráfico pueden multiplicarse rápidamente. Es un problema de seguridad y salud pública que se deberá afrontar en breve.

En muy poco años, Chile se ha convertido en un país de tránsito y también en consumidor de pasta base y cocaína⁹⁶. Hasta ahora los esfuerzos del Estado se han centrado en la represión policial del consumo y el microtráfico, pero se hace poco en la prevención tanto dentro como fuera del país. ¿Por qué los chilenos dejamos que Estados Unidos, protegiendo sus intereses nacionales, actúe en forma aislada y unilateral en el combate de la producción y comercialización de la droga dentro de los países productores o que los países europeos monopolicen los esfuerzos por llevar adelante programas de sustitución de cultivos ilícitos? Es evidente que los dos vecinos de Chile no están en condiciones de erradicar esta plaga. Al menos no en los próximos años. Chile hace muy poco, siendo hace rato parte del problema.

Un problema derivado de esta situación es la creciente población penal extranjera en cárceles chilenas. Proviene especialmente del Perú, Bolivia y Colombia. Actualmente, la población penal extranjera en Chile asciende a 1.148 reclusos. Casi la mitad son peruanos (481). Aunque hoy en día sólo representa el 3% de la población penal, se trata de un grupo de alto riesgo, pues el 80% de los extranjeros se encuentra detenido por tráfico de drogas.

Otro tema de preocupación es el de la inmigración. Desde hace años Chile se está haciendo atractivo para la inmigración proveniente de países vecinos, especialmente del Perú. Es muy probable que en el corto plazo vengan también miles de bolivianos, ecuatorianos, etc. En pocos años habrá minorías establecidas que requerirán educación, servicios médicos, etc. Chile tendrá los mismos problemas de Estados Unidos con los mexicanos y de Alemania con los turcos. En Chile se discuten muy poco estos temas y prácticamente no se hacen esfuerzos por coordinarse con los países de origen de dichos inmigrantes.

Pese a los buenos deseos y los muchos esfuerzos, se comprueba que ningún control fronterizo por bueno que sea –Estados Unidos lo demuestra todos los días en su difícil vecindad con México- ni ninguna barrera de minas antipersonal puede

⁹⁶ “Durante el año 2003 se realizaron 6.890 procedimientos por infracción a la Ley de Drogas informados por ambas policías y el Servicio Nacional de Aduanas, cifra que representa un aumento, respecto a los años 2001 y 2002, equivalente a un 7,64% y 18,04%, respectivamente”. Gobierno de Chile, Ministerio del Interior, *Informe anual de estadísticas nacionales y regionales sobre narcotráfico nacional y microtráfico en el Gran Santiago. 2003*, Santiago, Febrero de 2004. p. 5.

impedir el contrabando y el tráfico de personas. Puede evitar una invasión militar, pero no una no convencional.

Conclusiones

Los militares saben muy bien lo difícil que es defender a Chile. Su falta de profundidad estratégica que permite un ataque relativamente sencillo a sus principales ciudades y centros neurálgicos, su extenso y largo territorio que puede ser cortado en varias partes, dividiendo prácticamente el país, y la distancia que media entre los dos escenarios posibles de conflicto –extremo norte y extremo austral-, obliga a contar con unidades militares fuertemente armadas en gran parte del territorio, lo que implica un alto costo presupuestario.

Esta compleja realidad debiera propender a buscar soluciones políticas que “desmilitaricen” la relación con los vecinos y eliminen permanentemente las actuales hipótesis de conflicto que, en su versión más extrema, implican para Chile la HV3, la hipótesis vecinal tres, o sea, un conflicto armado con los tres países fronterizos simultáneamente.⁹⁷

Como se ha señalado precedentemente, una guerra internacional mal terminada se prolongó en una posguerra compleja y de larga duración, que en varias oportunidades pudo haberse convertido en una nueva guerra entre los antiguos adversarios.

Hoy en día, Chile y sus vecinos del norte deben vivir con la hipoteca de la guerra decimonónica. Inexorablemente, una mala vecindad y las suspicacias de un pasado belicoso han cristalizado de tal modo en amplios sectores de las tres sociedades, que, independiente del signo ideológico de los gobiernos, se han mantenido hasta el presente. Sin un cambio radical y proactivo, éstas tenderán a permanecer en el tiempo.

Una forma de superación será la adopción de una actitud crítica respecto de nuestra historia común, salpicada de hechos infaustos y para nada honrosos, tales como la *chilenización* violenta del Norte Grande a través de las Ligas Patrióticas, el supuesto deseo de partición de Bolivia, etc.

Una nueva disposición implicará necesariamente mayor cantidad y calidad de medidas de confianza mutua, superando la mera disuasión y los esquemas anquilosados de la “suma cero”. En suma, la relación trinacional necesitará mayor

⁹⁷ En dos oportunidades ha habido un peligro más o menos real de concreción de la hipótesis vecinal 3; paradójicamente en ambas ocasiones el conflicto se originó con Argentina (1898-1902 y 1974-78).

imaginación, ahondando los vínculos económicos, pero sin descuidar los aspectos culturales y el contacto siempre constructivo entre las personas de carne y hueso.